

**Consejo de Seguridad**

Distr. general
20 de febrero de 2004
Español
Original: inglés

Carta de fecha 17 de febrero de 2004 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1373 (2001)

Me dirijo a usted en relación con mi carta de 21 de noviembre de 2003 (S/2003/1122). El Comité contra el Terrorismo ha recibido el cuarto informe del Canadá, presentado con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 6 de la resolución 1373 (2001) (véase anexo). Agradecería que tuviera a bien hacer distribuir la presente carta y su anexo como documento del Consejo de Seguridad.

(Firmado) Inocencio F. **Arias**
Presidente del Comité del Consejo de Seguridad
establecido en virtud de la resolución 1373 (2001)
relativa a la lucha contra el terrorismo



Anexo

Nota verbal de fecha 12 de febrero de 2004 dirigida al Presidente del Comité contra el Terrorismo por la Misión Permanente del Canadá ante las Naciones Unidas

La Misión Permanente del Canadá ante las Naciones Unidas saluda atentamente al Presidente del Comité y tiene el honor de remitir el cuarto informe del Canadá relativo a la aplicación de la resolución 1373 (2001) (véase apéndice).

Apéndice

Aplicación de la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Cuarto informe del Canadá dirigido al Comité contra el Terrorismo de las Naciones Unidas

1.1 El Comité contra el Terrorismo desearía saber si el Centro de Análisis de operaciones e Informes Financieros del Canadá (FINTRAC) dispone de recursos suficientes (humanos, financieros y técnicos) como para desempeñar su mandato.

El Centro de Análisis de Operaciones e Informes Financieros del Canadá (FINTRAC) es un organismo especializado que ha sido creado para recibir, analizar, evaluar y difundir información financiera relativa a sospechas de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo. El Centro entró en funcionamiento en octubre de 2001 y comenzó a presentar informe en marzo de 2003. El FINTRAC pone de manifiesto el compromiso del Gobierno del Canadá de luchar contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.

Con arreglo a la Ley sobre el producto del delito (blanqueo de dinero) y financiación del terrorismo, el FINTRAC proporciona a los organismos de aplicación de las leyes e inteligencia información financiera acerca de las sospechas de operaciones de blanqueo de dinero, financiación de actividades terroristas y amenazas para la seguridad del Canadá. Además, el Centro también puede proporcionar información a las dependencias de inteligencia financiera de otros países, siempre y cuando haya suscrito un acuerdo respecto del intercambio de información. El FINTRAC tiene un presupuesto anual de 32 millones de dólares canadienses y un complemento de personal de 194 funcionarios (a diciembre de 2003). Como se señaló en la evaluación trienal de la Iniciativa Nacional de lucha contra el blanqueo de dinero, el FINTRAC se encuentra en funcionamiento y divulga información a los organismos competentes de aplicación de las leyes. El Centro sigue aumentando su capacidad técnica y seguirá perfeccionando sus recursos técnicos a fin de poder realizar una selección entre más de 9 millones de informes que recibe todos los años. El FINTRAC cumple con las obligaciones que le competen pero tal vez necesite recursos adicionales en el futuro con objeto de optimizar su capacidad de análisis y hacer frente a los nuevos desafíos que planteen las actividades delictivas y la evolución de la tecnología.

1.2 Sírvase indicar cuántos servicios de remesa y transferencia de dinero se encuentran inscritos y/o tienen permiso para funcionar en el Canadá. Sírvase describir las disposiciones jurídicas que se han aplicado para impedir que sistemas no estructurados de transferencia de valores sean utilizados a los fines de la financiación del terrorismo. De no existir tales disposiciones, sírvase indicar las medidas que el Canadá se propone adoptar a fin de cumplir plenamente con estas disposiciones de la resolución.

Las empresas que prestan servicios de transferencia de dinero, incluidos los sistemas alternativos de remesa, están sujetos a la Ley sobre el producto del delito. Como otras instituciones e intermediarios financieros, ellas deben determinar la identidad de sus clientes, mantener registros de las operaciones y presentar al FINTRAC informes sobre las operaciones financieras realizadas y las operaciones sospechosas.

En la actualidad en el Canadá no se exige el registro ni la obtención de permiso a las entidades que realizan remesas de dinero. El Canadá está estudiando las posibilidades de establecer un sistema de registro de esas empresas.

1.3 Sírvase indicar al Comité el número de informes sobre operaciones sospechosas recibidos por el FINTRAC y otras autoridades competentes.

Las instituciones y los intermediarios financieros que deban presentar informes de conformidad con la Ley sobre el producto del delito deben remitir un informe sobre cada operación financiera respecto de la que existan motivos justificados para sospechar que se vincula con la comisión de un delito de blanqueo de dinero o con la financiación de actividades terroristas.

Durante el ejercicio económico 2002/2003, el FINTRAC recibió un promedio mensual de 1.433 informes. Esa cifra fue superior al promedio del año anterior, que fue de 744 informes mensuales. No obstante, cabe señalar que el requisito de presentar informes entró en vigor en noviembre de 2001. Entre noviembre de 2001 y marzo de 2003, el FINTRAC recibió un total de 17.197 informes. Los porcentajes correspondientes a cada sector son los siguientes:

- 55%: entidades financieras (bancos, cooperativas, cajas de crédito, entidades de ahorro y préstamo)
- 40%: casas de cambio de divisas y empresas de servicios financieros
- 5%: otros (casinos, empresas de seguros de vida, inmobiliarias, agentes de bolsa y otros)

Los informes sobre operaciones sospechosas son importantes para nuestro análisis y han dado lugar a un número considerable de denuncias.

1.4 El Comité contra el Terrorismo agradecería que el Canadá describiera los principales procedimientos jurídicos que aplica en relación con la confiscación de bienes y otros mecanismos de decomiso.

Competencia constitucional. El Canadá es una federación en la que el Parlamento federal tiene exclusiva competencia constitucional para promulgar legislación en materia de derecho penal, con inclusión de las leyes sustantivas y de procedimientos relacionadas con la prevención y represión del terrorismo. La administración de la justicia penal, incluida la aplicación de las leyes y las acciones penales, por lo general incumben a las provincias, pero se ha establecido una jurisdicción federal encargada de los delitos federales y los asuntos relacionados con la justicia penal de carácter interprovincial o internacional. En las disposiciones sobre lucha contra el terrorismo del Código Penal se estipula que el fiscal general federal o provincial puede ejercer la acción penal y adoptar decisiones conforme a cada caso en particular. Las autoridades federales de aplicación de las leyes y la seguridad son las que por lo general dirigen las causas relacionadas con actos de terrorismo, con la colaboración de las fuerzas de policía provinciales, incluidas las municipales, según las particularidades de cada caso. Al ejercer las facultades estipuladas en la legislación que competen a “todo oficial de paz”, en una provincia, el funcionario federal o el funcionario designado como tal por la provincia podrá proceder de ese modo.

Congelación de bienes. Tratándose de bienes terroristas (es decir, todo bien de propiedad de un grupo terrorista o controlado por éste), la congelación se produce en forma automática en virtud de la legislación, sin necesidad de que las autoridades

ejecutivas o judiciales adopten una decisión o medida al respecto. Las disposiciones pertinentes se aplican en todos los casos en que una persona residente en el Canadá o un canadiense residente fuera del Canadá sepa que posee o administra en forma directa o indirecta tales bienes, realiza operaciones o presta servicios financieros o similares con dichos bienes. Las leyes canadienses también disponen la tipificación como delito del desconocimiento doloso por el acusado de datos esenciales en algunas circunstancias y la prohibición de congelar bienes se extiende a los casos en que frente a algunos motivos para considerar que los bienes podrían ser de propiedad o estar bajo el control de un grupo terrorista, la persona que los administra deliberadamente manifieste desconocer su índole. Dado que no media decisión o autoridad judicial o ejecutiva alguna, la congelación de los bienes se produce sin que se adopte medida alguna de decomiso o embargo. La congelación tiene el efecto directo de una prohibición de comerciar o realizar operación o servicio alguno respecto de tales bienes y se aplica a toda persona que los posea o que se encuentre en condiciones de realizar cualesquiera de las actividades prohibidas. El incumplimiento de la obligación de congelar los bienes es considerado un delito punible con hasta 10 años de prisión.

Declaración de bienes u operaciones. Cuando una persona sepa que los bienes que se encuentran en su poder o que administra son de propiedad de un grupo terrorista o tenga información acerca de alguna operación o posible operación con tales bienes, existe la obligación positiva de declarar de inmediato la existencia de los bienes o la información acerca de la operación al Comisionado de la Real Policía Montada del Canadá y al Director del Servicio de Inteligencia y Seguridad del Canadá. Además es preciso comunicar esa información al FINTRAC. La información transmitida al Comisionado puede ser comunicada, según convenga, a los demás organismos de aplicación de las leyes del Canadá. El FINTRAC puede incorporar el informe en sus bases de datos a fin de evaluar las actividades delictivas de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo. Además de las investigaciones complementarias que realicen los organismos de aplicación de las leyes o el Servicio de Inteligencia y Seguridad del Canadá, es posible que se solicite a los fiscales que pidan autorización para decomisar o asumir la administración de los bienes. El Comisionado de la Real Policía Montada del Canadá y los directores del FINTRAC y el Servicio de Inteligencia son todos altos funcionarios federales, que deben cumplir los mandatos que se les han encomendado y están sujetos a la supervisión de sus respectivas organizaciones.

Decomiso o embargo de bienes. La congelación de bienes en virtud de lo dispuesto en el artículo 83.08 deriva en la prohibición de realizar todo tipo de operaciones con los bienes pero no afecta su tenencia o administración, para lo cual es necesario el decomiso o embargo. Existen varias opciones para ello en la legislación canadiense. Por lo general, puede obtenerse una orden de allanamiento judicial para registrar y decomisar bienes que constituyan la prueba o el producto de un delito. Esto por lo general consiste en el decomiso físico y se aplica a los bienes muebles y tangibles. También pueden obtenerse órdenes judiciales de embargo, con las que se prohíbe toda operación con los bienes afectados; ellas se aplican por lo general a bienes inmuebles (tierras, etc.) o intangibles (cuentas bancarias, etc.). El funcionario federal o provincial competente (según el procedimiento de que se trate) puede solicitarlas a un tribunal. Las órdenes de allanamiento son ejecutadas por los oficiales de paz competentes, en tanto las órdenes de embargo se aplican directamente a quienes tengan en su poder los bienes de que se trate. Todas pueden ser obtenidas *ex parte*, están sujetas a un examen judicial y las personas afectadas tienen la posibilidad de

impugnar los fundamentos de la orden o la manera en que fue ejecutada. Todas esas categorías de bienes están vinculadas con delitos de terrorismo, por lo cual los bienes que de algún modo estén relacionados con actividades terroristas o, en el caso del producto del delito, los bienes que sean el producto de un delito de terrorismo, estarán sujetos a decomiso o embargo conforme a las disposiciones pertinentes.

a) Tratándose de un bien mueble que constituya la prueba de un delito podrá obtenerse del funcionario judicial una orden de allanamiento que autorice el decomiso de los bienes.

b) En el caso de bienes relacionados con el delito (elemento utilizado o que habría de ser utilizado en la comisión de un delito grave o mediante el cual se haya cometido un delito grave) el funcionario judicial podrá dictar una orden de decomiso. Esas órdenes pueden ser ejecutadas por cualquier oficial de paz o por cualquier persona designada en la orden. Éstas pueden ser utilizadas para decomisar bienes muebles que se encuentren en el Canadá o como base para una solicitud de asistencia jurídica recíproca para que otro Estado decomise bienes muebles que se encuentren fuera del Canadá. Las órdenes de embargo se utilizan para bienes inmuebles o intangibles y también pueden aplicarse a bienes que se encuentren fuera del Canadá, en la medida en que pueda ordenarse a las personas que se encuentren en la jurisdicción del tribunal que dicta la orden que no realicen operación alguna con tales bienes. Las órdenes de embargo deben ser notificadas a quienes se vean obligados por ellas y en el caso de las personas que se encuentren fuera de la jurisdicción del tribunal puede solicitarse asistencia al respecto a otros Estados.

c) Si los bienes son muebles y constituyen el producto de un delito, incluido un delito de terrorismo, el fiscal general competente podrá pedir una orden de allanamiento especial a fin de decomisarlos. Por producto del delito se entiende en términos generales “todo bien, beneficio o ventaja, dentro o fuera del Canadá, obtenido o derivado directa o indirectamente de la comisión en el Canadá de un delito determinado o de la comisión u omisión de un acto que, de haber ocurrido en el Canadá habría constituido un delito tipificado”. Por delito tipificado se entiende todo delito grave, incluidos los de terrorismo, y en particular los de financiación del terrorismo, mencionados en el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo de 1999, así como los demás delitos que podrían ser utilizados para generar ingresos para la financiación del terrorismo, como el fraude, el secuestro o el robo. Dichas órdenes pueden ser ejecutadas por cualquier oficial de paz o por la persona designada en la orden y están sujetas a revisión por los tribunales. Por lo general se las utiliza como primera medida encaminada a la confiscación del producto.

d) Las órdenes judiciales de embargo son utilizadas por lo general en los casos en que los bienes no puedan ser decomisados físicamente mediante una orden. Con estas órdenes se prohíbe que una persona disponga de esos bienes u obtenga algún beneficio de ellos. Las órdenes dispuestas con arreglo al artículo 462.33 del Código Penal pueden ser aplicadas respecto de “cualquier bien”. También puede solicitarse una orden con arreglo al artículo 490.8 del Código Penal respecto de “cualquier bien relacionado con un delito”. Ese es el término de la legislación canadiense que se refiere a los medios e incluye los bienes utilizados o destinados a ser utilizados en la comisión de un delito grave o “mediante el cual o respecto del cual” se cometa un delito. La categoría de delitos a la que se refiere la definición incluye todos los delitos de terrorismo, lo cual significa que en tales casos se aplican ambos tipos de orden de embargo. Las órdenes de embargo pueden aplicarse a cualquier

clase de bien, pero se las utiliza más frecuentemente para los bienes que no son susceptibles de decomiso físico, como los bienes inmuebles (tierras, etc.) y los bienes intangibles (cuentas bancarias, entre otros). Esas órdenes son dictadas por un tribunal a petición del fiscal y están sujetas a la posterior revisión por los tribunales. Son notificadas a la persona física o jurídica a la que van dirigidas (por ejemplo, bancos e instituciones similares) y si se refieren a un terreno se las registra en los documentos oficiales que deben ser verificados antes de realizar cualquier traspaso de bienes, como los catastros.

e) Al enmendar el Código Penal, la Ley sobre la lucha contra el terrorismo creó una nueva medida para el embargo de bienes vinculados con grupos terroristas. Cuando haya motivos justificados para considerar que los bienes son propiedad o se encuentran en poder de un grupo terrorista o que han sido utilizados o lo serán, en su totalidad o en parte, para facilitar o llevar a cabo actividades terroristas, podrá solicitarse el decomiso o embargo y confiscación (respecto del decomiso, véase el apartado b) *supra*). En tales casos, de acuerdo con la información proporcionada por los organismos de aplicación de las leyes o el Servicio de Inteligencia y Seguridad del Canadá, el asesor del Fiscal General solicitará a un magistrado del Tribunal Federal del Canadá que dicte órdenes de decomiso o embargo. Podría dictarse una orden de allanamiento y decomiso de los bienes que se encuentren en el Canadá. Podría dictarse una orden de embargo por la que se prohíba realizar operaciones con los bienes a toda persona que se encuentre en la jurisdicción del tribunal así como respecto de los bienes que se encuentren fuera del Canadá y en relación con los bienes que se encuentren en el Canadá y que no sean susceptibles de decomiso físico, como bienes inmuebles (por ejemplo, tierras) y bienes intangibles (por ejemplo, cuentas bancarias). La legislación dispone que podrán aplicar esas medidas los funcionarios federales o provinciales de aplicación de las leyes y los fiscales generales y que cualquiera de ellos puede solicitar una orden de esa índole al Tribunal Federal. No obstante, en la mayoría de los casos relacionados con terrorismo esas medidas serían utilizadas por los organismos y funcionarios federales competentes debido al carácter internacional e interprovincial de las causas.

Decomiso o embargo en causas transnacionales. Con arreglo al Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo así como en virtud de otros tratados que contienen disposiciones sobre asistencia jurídica recíproca es posible dictar diversas órdenes de decomiso y embargo en respuesta a pedidos de asistencia. En algunos casos también pueden dictarse órdenes para la recolección de pruebas a fin de que un tercero proporcione documentos o preste declaración. Pueden obtenerse pruebas y se puede disponer el decomiso o embargo de los bienes utilizados como medios (en la legislación canadiense, “bienes relacionados con el delito”) así como el producto del delito. Esas solicitudes se cursan con arreglo a la Ley sobre asistencia jurídica recíproca en asuntos penales del Canadá. Los pedidos se tramitan en la forma de práctica; son aprobados por el Grupo de Asistencia Internacional del Ministerio de Justicia y son asignados al asesor del Fiscal General del Canadá o de una de las provincias a fin de obtener las órdenes judiciales pertinentes o presentar los documentos necesarios ante un tribunal superior del Canadá con jurisdicción penal. Los organismos canadienses de aplicación de las leyes hacen cumplir tales órdenes, incluida la realización de los allanamientos o incautaciones que sean necesarios y la entrega de las órdenes de embargo o comparecencia a las personas identificadas o que podrían verse afectadas por ellas en el Canadá.

Administración de bienes decomisados o embargados. A fin de proteger los intereses legítimos y reducir a un mínimo las pérdidas económicas, las leyes canadienses disponen la administración de los bienes decomisados o embargados hasta tanto se dicte una orden definitiva respecto de su destino. Las disposiciones se aplican por igual a los bienes decomisados o embargados de resultados de las solicitudes formuladas en el país y las solicitudes formuladas de conformidad con pedidos de asistencia recíproca. Las disposiciones permiten que el tribunal que ordena el decomiso o embargo imponga condiciones al respecto. La autoridad para administrar incluye la posibilidad de vender los bienes, en caso de que éstos se desvaloricen o deterioren rápidamente. Con sujeción a la aprobación del tribunal, y previa notificación a las personas que tengan un interés válido en ellos, los bienes de escaso valor pueden ser destruidos. A petición del Fiscal General del Canadá, el tribunal puede designar al Ministro de Obras Públicas y Servicios de Gobierno como administrador y en este caso los bienes serán administrados por una sección de administración de bienes de ese ministerio en virtud de lo dispuesto en la Ley sobre administración de bienes incautados. Se adoptan otras disposiciones para la administración cuando el pedido provenga del fiscal general de una provincia, pero ello es poco probable que ocurra en casos de financiación del terrorismo.

Revocación del decomiso o embargo. Como se señaló, las órdenes de decomiso o embargo se obtienen inicialmente *ex parte* pero están sujetas a un examen judicial posterior. El derecho a obtener la revocación de esas órdenes se aplica desde el momento en que se dicta o ejecuta la orden. Toda persona que tenga un interés válido en los bienes puede solicitar a un tribunal que sea revocada, notificando al asesor del fiscal general (federal o provincial) a petición de quien se dictó la orden original. Entre las formas de revocación figuran el derecho a solicitar el acceso a los bienes correspondientes a fin de sufragar honorarios profesionales, gastos de subsistencia y gastos operativos razonables. El tribunal debe considerar los demás bienes del solicitante así como los honorarios correspondientes a la asistencia letrada. El derecho a solicitar la revocación de la medida se extingue si se dicta una orden de confiscación contra los bienes. La revocación se solicita por lo general en un tribunal con jurisdicción penal pero también puede efectuarse en el Tribunal Federal del Canadá en algunos casos.

Confiscación. Como se señaló, las facultades de confiscación y embargo, aparte de las correspondientes a la confiscación de bienes que constituyen una prueba en una causa penal, por lo general se extinguen con el procedimiento de confiscación de los bienes, en un tribunal con jurisdicción penal. En el caso de los bienes que sean de propiedad o estén bajo el control de un grupo terrorista y de los bienes que hayan sido utilizados o vayan a ser utilizados, en su totalidad o en parte, para facilitar la realización de actividades terroristas o para llevarlas a cabo, seguirá aplicándose cuando corresponda la confiscación penal, que también podrá solicitarse mediante una petición civil en el Tribunal Federal del Canadá. En el Canadá también se puede dar cumplimiento a una orden de confiscación impuesta como pena de un delito dictada en el exterior. En tales casos, la petición se remite por los canales habituales, es aprobada por el Grupo de Asistencia Internacional del Ministro de Justicia y se la asigna al asesor del Fiscal General del Canadá o de una provincia. El asesor entonces solicita su aplicación a un tribunal superior con jurisdicción penal en el Canadá. Cuando un tribunal penal o el Tribunal Federal ordena la confiscación o la ejecución de una orden procedente del exterior, esas medidas son llevadas a cabo por el organismo competente.

Medidas que se adoptan tras la confiscación. Todos los bienes confiscados son confiscados en beneficio del Estado, ya sea el gobierno federal o un gobierno provincial, de acuerdo con lo solicitado en la orden de confiscación y el Fiscal General que la dictó. Las órdenes de confiscación son definitivas y están sujetas a apelación durante un período establecido en las disposiciones legislativas. El estatuto del Fiscal General solicitante reviste importancia dado que todas las disposiciones de confiscación especifican que los bienes se confiscan y “se dispondrá de ellos de acuerdo con lo que disponga el Fiscal General o con arreglo a las leyes”. Ello significa que los bienes confiscados por lo general se confiscan a cargo de un fiscal general federal o provincial, de acuerdo con la autoridad de gobierno que inició las actuaciones. En el caso de las confiscaciones a cargo del Fiscal General del Canadá, se aplican las disposiciones de la Ley sobre administración de bienes incautados. La confiscación puede ejecutarse en cualquiera de los casos siguientes:

- a) El bien está relacionado con un delito (Código Penal, art. 490.1);
- b) El bien es el producto del delito (Código Penal, arts. 462.38 ó 462.78);
- c) Se desconoce el propietario del bien incautado o bien la persona a quien se le incautó o embargó estaba en posesión de él en forma ilegítima (Código Penal, arts. 462.38 ó 462.78);
- d) El Tribunal Federal del Canadá confisca el bien por estar relacionado con el terrorismo (Código Penal, art. 83.14). Para esos casos existen dos alternativas:
 - i) Pueden ser tratados exactamente igual que cualquier otro bien confiscado, que es entregado a las autoridades federales o provinciales competentes, según el fiscal general que haya presentado la solicitud de confiscación (párr. 5) del artículo 83.14); o
 - ii) Es posible que la legislación disponga que se utilice el bien confiscado para indemnizar a las víctimas de un acto terrorista y para financiar actividades de lucha contra el terrorismo (párrs. 5.1 y 5.2 del artículo 83.14).

Es posible confiscar el producto sin haber obtenido primero la condena del autor del delito (es decir, confiscación *in rem*). Desde 1998 es posible en el Canadá realizar la confiscación del producto de un delito sin que medie una condena. De conformidad con la legislación vigente, puede confiscarse tanto el producto del delito como los bienes relacionados con el delito, no habiendo una condena, si se hubiera probado sin lugar a dudas que los bienes son el producto del delito o están relacionados con él y que se han iniciado actuaciones judiciales en relación con el delito y el acusado ha fallecido o se encuentra prófugo. Esas disposiciones podrían aplicarse en los casos en que los bienes fueran el producto de un delito de terrorismo o estuvieran vinculados con tal delito. En las enmiendas de 2001 se dispusieron nuevas facultades para la confiscación de bienes pertenecientes, bajo el control o a nombre de un grupo terrorista y de bienes que han sido utilizados o serán utilizados para facilitar o realizar una actividad terrorista. Esas disposiciones otorgan facultades más generales al respecto; siempre que se determine que existe un vínculo con un grupo terrorista o con actividades terroristas, no será necesario identificar, enjuiciar o condenar a persona alguna.

Esa disposición también puede ser utilizada en relación con los bienes confiscados por otras razones, ya sean bienes terroristas, bienes relacionados con un delito, pruebas del delito, producto del delito o bienes de otra índole, o en contra de bienes

que no han sido confiscados ni embargados. Ello podría ocurrir, por ejemplo, en los casos de congelación de bienes previstos en la legislación. Sólo hace falta probar de acuerdo con un equilibrio de probabilidades la identificación de los bienes y su vínculo con los grupos o actividades terroristas; ese es un criterio menos exigente que el establecido en la legislación penal del Canadá que determina que se debe probar sin lugar a dudas. Las órdenes de confiscación de bienes terroristas pueden ser obtenidas únicamente del Tribunal Federal del Canadá, a petición de un fiscal general federal o provincial y cuando se ordene la confiscación se deberá disponer de los bienes de acuerdo con lo que determine el Fiscal General.

Existen disposiciones que permiten la revisión de las decisiones adoptadas por las autoridades. Todas las actuaciones que den lugar a órdenes de allanamiento, decomiso y embargo de bienes de cualquier índole en el Canadá pueden ser promovidas *ex parte* pero están sujetas a algún tipo de examen judicial o revisión de la sentencia recurrida y existe la posibilidad de resarcimiento cuando se determine que se han excedido las facultades concedidas o cuando se descubra posteriormente que los fundamentos de la medida adolecían de deficiencias en algún aspecto. Además de los fundamentos sustantivos y de procedimiento con arreglo a la legislación vigente, esas actividades deben también ajustarse a las normas constitucionales básicas que garantizan el derecho a no ser sometido a allanamiento y decomiso sin fundamentos, con sujeción a la aplicación de posibles recursos, entre ellos la exclusión de pruebas.

Los mecanismos de tales revisiones y recursos varían según el carácter de la medida autorizada, los bienes a los que se aplican y otros factores; los detalles se exponen en las respuestas anteriores correspondientes a cada atribución. Por lo general, los tribunales con jurisdicción penal entienden en las revisiones y las apelaciones relacionadas con las atribuciones utilizadas en las causas penales, a menudo como cuestión preliminar previa a un procedimiento penal o como una cuestión planteada en la apelación de una condena. Las disposiciones que rigen el decomiso, el embargo y la confiscación de bienes relacionados con actos terroristas, los artículos 83.13 y 83.14 del Código Penal, no son aplicados por tribunales penales ordinarios y en ellos no se establece un procedimiento de apelación específico. Dado que las actuaciones por confiscación no son *ex parte*, se notifica a las personas de quienes se sabe que poseen o controlan los bienes y, según corresponda, a otras partes interesadas en calidad de demandados, quienes pueden comparecer e impugnar la confiscación. Si se ordena la confiscación, cualesquiera de esas partes pueden entonces apelar conforme a las disposiciones del artículo 27 de la Ley sobre tribunales federales. Toda parte interesada que no haya recibido notificación del pedido de confiscación podrá también presentar una petición para modificar o revocar la confiscación en un plazo de 60 días. La primera apelación debe ser hecha ante el Tribunal Federal de Apelaciones, que tiene atribuciones para modificar o revocar la orden, y toda otra apelación posterior deberá ser efectuada, previa autorización, ante la Corte Suprema del Canadá con arreglo a las disposiciones de la Ley sobre la Corte Suprema. Todos esos tribunales tienen competencia para entender en las impugnaciones y apelaciones basadas en cuestiones jurídicas y constitucionales. Hasta la fecha no se han presentado apelaciones relativas a bienes terroristas pero ha habido numerosos casos vinculados con otros bienes resultantes de actividades delictivas y peticiones de impugnación de confiscaciones y embargos. El caso más reciente y destacado fue un dictamen de la Corte Suprema del Canadá (Quebec (Fiscal General) contra Laroche [2002] 3 S.C.R. 708).

Desde el 1º de enero de 2004 no se han registrado confiscaciones o decomisos con arreglo a esas disposiciones.

Las leyes canadienses permiten que los bienes confiscados sean utilizados para atender reclamaciones de daños y perjuicios presentadas por personas que declaren haber sufrido lesiones de resultados de la comisión de un delito. El subartículo 5.1 del artículo 83.14 del Código Penal dice lo siguiente:

“El producto derivado de la liquidación de bienes conforme al subartículo 5) [bienes relacionados con grupos o actividades terroristas de acuerdo con lo estipulado en el subartículo 1 de los párrafos a) y b)] puede ser utilizado para indemnizar a las víctimas de actividades terroristas y financiar actividades de lucha contra el terrorismo de conformidad con las normas que dicte el Gobernador con arreglo al subartículo 5.2 [distribución del producto].”

Los pedidos de asistencia procedentes del exterior y la aplicación de las órdenes del exterior se tratan conforme a lo indicado en los párrafos anteriores referidos al decomiso, embargo y confiscación con arreglo a lo estipulado en la Ley sobre asistencia jurídica recíproca en asuntos penales. El proceso es el mismo que el que se sigue en el caso de la asistencia jurídica recíproca en general: según la necesidad de adoptar medidas de seguridad respecto de las causas vinculadas con actos de terrorismo, se remite un pedido al Canadá por vía diplomática, el cual es enviado a la dependencia correspondiente del Departamento federal de justicia. Allí se examinan los fundamentos jurídicos, se solicita la información complementaria que sea necesaria y se remite el asunto a los fiscales y las entidades o autoridades de aplicación de las leyes para que adopten las medidas correspondientes.

En el caso de confiscación, el producto de la confiscación es tratado por lo general de acuerdo con lo que disponga el fiscal general competente (federal o provincial), aunque en el artículo 9.4 de la Ley sobre asistencia jurídica recíproca en asuntos penales se dispone una excepción respecto de la aplicación de una orden de confiscación procedente del exterior. En este caso se considera que los bienes o el producto de su liquidación han de imputarse a favor del gobierno federal, aun cuando una provincia haya iniciado las actuaciones. Esta medida asegura que puedan compartirse los bienes con el Estado solicitante, conforme al artículo 11 de la Ley sobre administración de bienes incautados.

1.5 Sírvase indicar si el Canadá ha emprendido acciones judiciales contra organizaciones sin fines de lucro por su presunta implicación en la financiación del terrorismo, y si ha congelado los activos de dichas organizaciones por sus supuestos vínculos con grupos o actividades terroristas.

Hasta la fecha el Canadá no ha entablado ninguna acción judicial específica contra organizaciones sin fines de lucro por su presunta implicación en la financiación del terrorismo. No obstante, según se indica más abajo, el Canadá ha tomado medidas para incluir a estas organizaciones en listas confeccionadas a estos efectos, congelar sus activos y prohibir que se recauden fondos en su beneficio.

Según se indica en informes anteriores (S/2003/403 y S/2001/1209), el Canadá cuenta con mecanismos legislativos y administrativos para hacer frente a las organizaciones y personas involucradas en la financiación del terrorismo.

De conformidad con las Normas para la represión del terrorismo con arreglo a las disposiciones de las Naciones Unidas, promulgadas en respuesta a la resolución 1373 del Consejo de Seguridad y los atentados del 11 de septiembre de 2001, el Canadá ha incluido en la lista a varias organizaciones internacionales sin fines de lucro

en concertación con otros asociados internacionales e independientemente del Comité de Sanciones contra Al-Qaida y los talibanes.

La inclusión de una entidad en la lista establecida según la Normas para la represión del terrorismo con arreglo a las disposiciones de las Naciones Unidas conlleva la congelación de hecho de los activos de la entidad, dado que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de las Normas:

Ninguna persona en el Canadá y ningún canadiense fuera del territorio nacional podrán deliberadamente:

- a) Negociar directa o indirectamente con bienes de personas incluidas en la lista o con fondos derivados o generados a partir de bienes que sean propiedad de ellas o estén bajo su control directo o indirecto;
- b) Celebrar o facilitar directa o indirectamente cualquier transacción relativa a las operaciones a que se hace referencia en el párrafo a);
- c) Proporcionar servicios financieros u otros conexos respecto de los bienes a que se hace referencia en el párrafo a); ni
- d) Poner directa o indirectamente a disposición, de personas incluidas en la lista cualesquiera bienes, servicios financieros u otros servicios conexos.

En el Canadá se ha incluido en la lista a varias organizaciones sin fines de lucro y entidades benéficas, con la correspondiente congelación de sus activos, entre ellas las siguientes:

Al Aqsa Foundation

Holy Land Foundation for Relief and Development

INTERPAL

Somali International Relief Organization

Wafa Humanitaria Organization

1.6 Sírvase explicar las normas sobre identificación de personas y entidades:

Que mantienen una cuenta bancaria – Cuando se abra una cuenta, las entidades financieras deberán determinar la identidad del titular por medio de un documento de identidad original expedido por el gobierno federal o por un gobierno provincial, bien sea pasaporte, certificado de nacimiento, permiso de conducir u otro similar.

Cuando la persona no se encuentre presente, la entidad financiera deberá verificar que un cheque girado por ella contra una cuenta de una entidad financiera fiscalizada ha sido compensado, como confirmación de que la otra institución financiera ha comprobado la identidad del cliente.

Cuando el cliente sea una persona jurídica, su identidad deberá verificarse recurriendo a documentos como la escritura de constitución o el contrato de sociedad.

A cuyo nombre se mantenga una cuenta bancaria (por ejemplo, los beneficiarios finales) – Cuando se abre una cuenta, las instituciones e intermediarios financieros deberán determinar si el cliente actúa en nombre de un tercero y, en caso afirmativo, obtener información sobre este último (nombre, dirección y ocupación).

No es necesario identificar a propietarios ni accionistas cuando el cliente sea una sociedad. No obstante, el Canadá está examinando distintas opciones para cumplir las normas generales establecidas por el Grupo de acción financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI) a este respecto.

Que sean beneficiarias de transacciones realizadas por intermediarios profesionales – Los intermediarios profesionales, entre ellos los contables y los agentes inmobiliarios, deberán verificar la identidad de los clientes que realicen ciertas transacciones por un importe superior al límite establecido. También son aplicables los requisitos de información sobre terceros mencionados anteriormente.

Relacionada con una transacción financiera – En estos casos se aplicarán las disposiciones mencionadas anteriormente. Cuando realicen transacciones por un importe superior al límite establecido, las entidades financieras y los intermediarios deberán determinar si la persona que lleva a cabo la operación actúa en nombre de un tercero, y en caso afirmativo obtener información sobre este último.

¿Impone el Canadá a las personas que administran fideicomisos la obligación de obtener información sobre fideicomisarios, fideicomitentes y beneficiarios? Sírvase indicar los procedimientos existentes en el Canadá para que los organismos extranjeros de seguridad y orden público u otras entidades de lucha contra el terrorismo puedan obtener esta información en los casos en que se sospeche la existencia de actividades terroristas.

Requisitos de las cuentas en fideicomiso – Cuando se abra una cuenta en fideicomiso, deberá verificarse la identidad del fideicomitente. En el caso de fideicomisos *inter vivos* —es decir, los que se constituyen y se ponen en marcha durante la vida de la persona a instancias de quien se constituyó—, también deberá obtenerse información sobre los beneficiarios (nombre, dirección y ocupación).

Intercambio de información – Cuando el Centro de Informes y Transacciones Financieras del Canadá (FINTRAC) tenga indicios razonables para sospechar que la información que haya recibido acerca de una transacción pueda ser relevante en la investigación o el enjuiciamiento de un delito de blanqueo de dinero o financiación del terrorismo, comunicará los datos de identificación esenciales a los organismos de seguridad o de inteligencia competentes, o a las dependencias de inteligencia financiera extranjera (FIU), de conformidad con el correspondiente memorando de entendimiento suscrito entre el FINTRAC y la dependencia extranjera en cuestión. El FINTRAC ha concertado acuerdos de intercambio de información con varias dependencias de inteligencia financiera extranjeras y en la actualidad está negociando acuerdos con otros países.

1.7 El Comité contra el Terrorismo desearía recibir un informe sobre la marcha de los trabajos relativos al proyecto de ley C-55.

El proyecto de ley C-17, al igual que sus antecesores (los proyectos C-55 y C-42), fue una de las diversas iniciativas del Gobierno en respuesta a los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001. En él se proponía la reforma de varias leyes para maximizar la capacidad del Canadá de impedir atentados terroristas. El proyecto de ley C-17 estaba tramitándose ante la Cámara Alta del Canadá (el Senado), pero el proceso de revisión y reforma no había concluido cuando la legislatura llegó a su fin el 12 de noviembre de 2003. En estos casos, el proyecto de ley queda archivado automáticamente a menos que el nuevo gobierno decida volver a presentarlo.

La finalidad del proyecto de ley C-17 era mejorar la capacidad del Gobierno para prevenir amenazas graves de atentados terroristas o su comisión y responder con rapidez a ellos mediante medidas como las siguientes:

- Autorizar la recopilación de datos de compañías aéreas y sistemas de reservas de aerolíneas para su transmisión a los departamentos y organismos federales con el objetivo de garantizar la seguridad nacional y del transporte;
- Permitir la expedición de órdenes provisionales en situaciones de emergencia;
- Aplicar íntegramente la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas biológicas y tóxicas, de modo que el Canadá pudiera cumplir más estrictamente con las obligaciones derivadas de este instrumento en pleno acuerdo con su derecho interno y asegurando el respeto de las prohibiciones establecidas en la Convención no sólo por el Gobierno del Canadá, sino también por los particulares, las organizaciones y las instituciones del país.

El Gobierno habrá de determinar el futuro de este proyecto de ley.

1.8 Sírvase explicar si en las estrategias o políticas del Canadá para luchar contra el terrorismo (a nivel nacional o subnacional) se incluyen las siguientes formas o aspectos de la actividad antiterrorista:

Investigación y enjuiciamiento penal

En la Ley de delitos contra la seguridad se encomienda explícitamente a la Real Policía Montada del Canadá el desempeño de las funciones de orden público en relación con los delitos previstos en el artículo 2 de la Ley, es decir todos los delitos y las detenciones relacionados con la comisión de un delito tipificado por el derecho del Canadá en los que se dé algunas de estas circunstancias:

- a) Cuando el supuesto delito sea el resultado de un comportamiento que constituya una amenaza para la seguridad del Canadá en el sentido de lo dispuesto en la Ley del Servicio de Inteligencia y Seguridad del Canadá; o
- b) Cuando la víctima del supuesto delito sea una persona sujeta a protección internacional en el sentido del artículo 2 del Código Penal.

Sin embargo, estos acuerdos tan sólo establecen los órganos competentes y las funciones que les corresponden en relación con un incidente. Debe observarse además que los delitos previstos en el Código Penal son más amplios que los de la Ley de delitos contra la seguridad y que todas las instancias policiales tienen obligaciones en relación con lo dispuesto en el Código Penal.

En los informes anteriores (S/2002/667 y S/2001/1209) puede consultarse la descripción de los Equipos Integrados de Seguridad Nacional de la Real Policía Montada del Canadá, creados específicamente para ocuparse de las cuestiones relativas a la investigación de actividades delictivas que constituyan una amenaza para la seguridad del Canadá.

Labor de inteligencia en la lucha contra el terrorismo (recursos humanos y técnicos)

El artículo 12 de la Ley del Servicio de Inteligencia y Seguridad del Canadá autoriza a ese Servicio a recabar, “mediante la realización de investigaciones, o de

otro modo”, información confidencial acerca de actividades sobre las que puedan existir sospechas fundadas de que constituyen una amenaza para la seguridad del Canadá. Según el párrafo c) del artículo 2 de dicha Ley, “las actividades realizadas en el Canadá o relacionadas con él que tengan por objetivo la amenaza o la comisión de actos graves de violencia contra personas o bienes, o el apoyo de dichos actos, a fin de obtener un fin político, religioso o ideológico en el Canadá o en un Estado extranjero “constituirán una amenaza para la seguridad del Canadá. En conjunto, estos artículos son el fundamento legal de la facultad del Servicio de Inteligencia y Seguridad para recopilar información confidencial para luchar contra el terrorismo. Las políticas y métodos mediante los que se obtiene esta información son confidenciales.

El Código Penal permite a la Real Policía Montada del Canadá recabar información confidencial en materia penal mediante la utilización de instrumentos técnicos con el fin expreso de entablar una acción penal.

El derecho canadiense exige que la acusación ponga a disposición de la defensa la información con que cuente a fin de garantizar un juicio justo, pero la identidad y otros datos personales de las fuentes de información quedan protegidos, a menos que el confidente testifique en el juicio. La normativa aplicable se basa en sentencias judiciales anteriores, jurisprudencia que ha sido confirmada por el Tribunal Supremo del Canadá.

Operaciones de fuerzas especiales

El Departamento de Defensa Nacional cuenta con fuerzas militares especializadas en la lucha contra el terrorismo listas para asistir inmediatamente a la policía en la resolución de incidentes terroristas.

Si bien las Fuerzas de lucha contra el terrorismo y rescate de rehenes del Canadá, conocidas con el nombre de Grupo de Acción Conjunto 2, pueden utilizarse en un amplio abanico de operaciones especiales fuera del Canadá, su misión primordial es prestar asistencia armada dentro del territorio del país. El Ministro de Seguridad Pública y Preparación ante Situaciones de Emergencia, que es el principal responsable de resolver los incidentes que se produzcan en suelo canadiense, deberá pedir al Ministro de Defensa Nacional autorización para utilizar fuerzas militares. La regulación de este procedimiento se recoge en la Ley de defensa nacional y en el reglamento que la desarrolla, titulado Normas de asistencia de las fuerzas armadas del Canadá.

Los contactos periódicos y la realización de ejercicios conjuntos de las fuerzas militares de lucha contra el terrorismo, la Real Policía Montada del Canadá y otros organismos de orden público garantizan una respuesta rápida, efectiva y sin fisuras al Gobierno del Canadá frente al terrorismo.

Como ocurre con todas las unidades de las fuerzas armadas del Canadá cuando operan dentro del país, el Grupo de Acción Conjunto 2 colabora con las autoridades civiles sin dejar por ello de estar integrado en la cadena de mando militar. Opera de conformidad con los principios nacionales convenidos de respuesta al terrorismo según aparecen en el Plan Nacional de Lucha contra el Terrorismo del Canadá. En este documento figuran previsiones detalladas para la coordinación de la respuesta militar y policial así como copias de los documentos necesarios para la cesión de competencias específicas (y limitadas) de la policía a los mandos militares durante una

crisis. Las autoridades civiles mantienen el control general de los incidentes terroristas que se produzcan en el Canadá.

Cuando los órganos de seguridad del Canadá reciben asistencia armada de las fuerzas militares, el personal militar queda sujeto a las leyes y normas canadienses y opera en el marco de reglas claras de intervención que permiten una respuesta eficaz, sin perjuicio del respeto del Estado de derecho.

Protección física de posibles objetivos terroristas

El Departamento de Seguridad Pública y Preparación ante Situaciones de Emergencia (que incluye la antigua Oficina de Protección de Infraestructuras Básicas y de Preparación ante Situaciones de Emergencia) cuenta entre sus competencias con dos funciones clave: dirigir a nivel nacional un enfoque moderno y global de la protección de las infraestructuras clave del Canadá —es decir los componentes físicos e informáticos más importantes en los ámbitos de la energía y los suministros, las comunicaciones y la tecnología de la información, las finanzas, la atención de la salud, la alimentación, el agua, el transporte, la seguridad, la administración y la industria; y ser el principal organismo gubernamental encargado de asegurar la preparación de la nación ante situaciones de emergencia civil de todo tipo.

La cooperación estrecha y el intercambio de información son esenciales en el ámbito de la seguridad y la inteligencia, particularmente en cuanto a las evaluaciones de las amenazas a las operaciones de información (guerra cibernética), así como el sabotaje y la delincuencia por Internet.

El Programa de Seguridad de las Infraestructuras Nacionales Básicas (NCIAP) está diseñado para facilitar un marco nacional de colaboración a todos los niveles de la administración del Canadá, el sector privado y los aliados y asociados internacionales con el objeto de garantizar la seguridad de las infraestructuras básicas del país. El marco de este Programa es el punto de partida necesario para alcanzar un enfoque nacional en los siguientes ámbitos fundamentales de las infraestructuras básicas:

- Creación de políticas y estrategias y formulación de decisiones comerciales y de inversión;
- Ejecución de planes de continuidad comercial y de seguridad; y,
- Ejecución y funcionamiento diarios de programas de seguridad y control del riesgo.

El objetivo primordial del Programa de Seguridad es garantizar que las infraestructuras nacionales básicas del Canadá tengan la solidez suficiente, de modo que esté asegurada la prestación continuada de los servicios esenciales a los ciudadanos canadienses. Este objetivo no podrá alcanzarse por medio de una medida o de un programa únicos, sino a través de un conjunto de medidas emprendidas paulatinamente por la asociación.

Análisis estratégico y previsión de amenazas nuevas

Según se indicaba en el *Informe Público del Servicio de Inteligencia y Seguridad del Canadá de 2002*, el mandato primordial del Servicio es recabar y analizar información confidencial e informar y asesorar al Gobierno sobre amenazas a la seguridad del Canadá. En estrecha cooperación con las otras secciones operativas del Servicio de Inteligencia y Seguridad, la Sección de Investigación, Análisis y

Producción es la principal responsable del análisis, la elaboración y la distribución de informes con información confidencial sobre cuestiones de seguridad importantes para las autoridades federales de alto nivel.

La Sección de Investigación, Análisis y Producción desempeña el papel de un intermediario que incorpora un valor añadido a la información desde que ésta se obtiene hasta que se transmite a los órganos de la administración federal y de seguridad. Los analistas de la Sección utilizan sus conocimientos de la situación regional, nacional y mundial para evaluar la calidad de la información obtenida y elaborar informes reveladores en materia de seguridad. La Sección prepara varios tipos de informes, y para ello se basa en muy diversos tipos de información, tanto pública como clasificada, proporcionando con ello al Gobierno evaluaciones de las amenazas planteadas por individuos u organizaciones que participan en actividades perjudiciales para la seguridad del Canadá.

Además de los análisis realizados por esa Sección, en febrero de 2003 el Servicio estableció un Centro Nacional Integrado de Evaluaciones de Seguridad (INSAC) a fin de facilitar la colaboración en el análisis y la divulgación de la información. El Centro Nacional refuerza la capacidad del Servicio de informar al Gobierno del Canadá sobre amenazas a la seguridad nacional.

Análisis de la eficiencia de la legislación de lucha contra el terrorismo y modificaciones correspondientes

El análisis de la eficiencia de la legislación de lucha contra el terrorismo es un proceso en curso en el Canadá. La Ley contra el terrorismo (proyecto de Ley C-36) está sujeta a una evaluación legislativa profunda en el plazo de tres años. El artículo 145 de la Ley establece:

En los tres años siguientes a la promulgación de la presente Ley, se llevará a cabo un examen general de las disposiciones contenidas en ella y de su aplicación a cargo de un comité del Senado, de la Cámara de los Comunes o de ambas Cámaras parlamentarias, según determinen o establezcan a ese fin el propio Senado, la Cámara de los Comunes o ambas Cámaras Parlamentarias.

La revisión legislativa de los tres años lleva aparejado un mandato para recomendar, en su caso, los cambios legislativos.

La Ley también exige que las dos nuevas facultades atribuidas a los órganos de seguridad, a saber el reconocimiento con condiciones (detención preventiva) y los interrogatorios con fines de investigación, queden sujetos al requisito de la presentación anual de informes. En consecuencia, tanto el Fiscal General como el Procurador General del Canadá estarán obligados a presentar anualmente informes al Parlamento sobre la utilización específica de esas facultades. Además de los informes de ámbito federal, los fiscales generales y los ministros encargados del orden público en cada una de las provincias del Canadá deberán publicar la misma información. Los informes federales correspondientes a 2002 pueden consultarse en las siguientes direcciones electrónicas:

http://www.psepc.gc.ca/national_security/publications_e.asp
<http://canada.justice.gc.ca/en/terrorism/annualreport.html>

Los informes federales correspondientes a 2003 están en período de elaboración para su posterior publicación.

Controles fronterizos y de inmigración

El Canadá participa en varios foros internacionales establecidos para intercambiar información sobre la situación de la migración ilegal y del uso indebido de documentos de viaje, como son la Conferencia sobre el Fraude de Inmigración, la Conferencia sobre Inteligencia Migratoria de la Cuenca del Pacífico, las Consultas intergubernamentales sobre política de asilo, refugiados y migración en Europa, América del Norte y Australia, el Grupo de los Ocho, y muchos otros. Desde 1997 ha existido un mecanismo de intercambio de información sobre presuntos terroristas entre los Estados Unidos y el Canadá. La Ley de inmigración y protección de los refugiados contiene una serie de criterios de inadmisibilidad que han reforzado la capacidad del Canadá para controlar la circulación de personas a través de sus fronteras, basándose, entre otros, en motivos de seguridad, violaciones de los derechos humanos, historial delictivo y delincuencia organizada, y falsedad.

A continuación, figura el artículo 34 de la Ley de inmigración y protección de los refugiados, que se ocupa específicamente de la cuestión de la seguridad:

34. 1) Los residentes permanentes y los extranjeros no podrán ser admitidos en el país por motivos de seguridad cuando en ellos concurra alguna de las siguientes circunstancias:
- a) Haber participado en un acto de espionaje o de subversión contra un gobierno, una institución o un proceso democráticos, según se entienden estos conceptos en el Canadá;
 - b) Haber participado en actos de subversión violenta contra un gobierno o instigado a ella;
 - c) Haber participado en actos de terrorismo;
 - d) Suponer un peligro para la seguridad del Canadá;
 - e) Haber participado en actos violentos que pongan o puedan poner en peligro la vida o la seguridad de las personas en el Canadá; o
 - f) Ser miembro de una organización respecto de la que existan sospechas razonables de que participa, ha participado o participará en alguno de los actos indicados en los párrafos a), b) o c).

En los puertos de entrada se han redoblado los esfuerzos para identificar e interceptar a presuntos terroristas que intenten entrar en el Canadá. Desde el 11 de septiembre de 2001, el Ministro de Ciudadanía e Inmigración ha adoptado medidas dirigidas específicamente a mejorar la eficacia de la lucha contra el terrorismo, entre las que se encuentran la introducción de una tarjeta de identidad más segura para los residentes permanentes, la realización de comprobaciones de seguridad sobre los refugiados al inicio del proceso de determinación de su condición; el aumento de la capacidad de detención y de deportación y el refuerzo de seguridad en los puertos de entrada. Además, como medida disuasoria de la comisión de delitos relacionados con la utilización de documentos falsos, la Ley de inmigración y protección de los refugiados prevé penas de hasta 14 años.

El 12 de diciembre de 2003, el Primer Ministro anunció la creación del Organismo de Servicios de Fronteras del Canadá, dependiente del Ministerio de Seguridad Pública y Preparación ante Situaciones de Emergencia. El Organismo de Servicios de Fronteras desempeña funciones de aduana, parte de las funciones relacionadas

con la seguridad y la información confidencial en materia de inmigración, y se ocupa de la inspección alimentaria. El establecimiento de este nuevo organismo permitirá una mayor coordinación entre los asociados en la gestión de la circulación a través de las fronteras del Canadá. Además, reforzará la capacidad de seguridad del Canadá para evitar el acceso al país de terroristas y de otros extranjeros a los que no se pueda permitir la entrada.

Control y prevención del tráfico de drogas, armas, armas biológicas y químicas, sus precursores y el empleo ilícito de materiales radiactivos

El Canadá cuenta con un amplio marco legal y un sistema de seguridad, incluidos la Ley de drogas y sustancias controladas y sus reglamentos, que se ocupan del tráfico ilegal de drogas en el ámbito del derecho penal, de conformidad con las Convenciones de las Naciones Unidas en la materia.

El control de las exportaciones de material militar y de importancia estratégica (incluidos el utilizado en el diseño, desarrollo y producción de armas químicas y biológicas) se lleva a cabo por medio de la Ley de permisos de exportación e importación, en la que se prevé la creación de la Lista de control de exportaciones, en la que se incluyen productos y tecnologías que sólo pueden exportarse una vez se obtenga un permiso válido. Esta lista se confecciona a partir de las redactadas por los mecanismos de control acordados internacionalmente: el Acuerdo de Wassenaar, el Grupo de Administradores Nucleares, el Grupo Australia y la Convención sobre las Armas Químicas.

La exportación sin el correspondiente permiso puede dar lugar a la imposición de multas o a la confiscación de los bienes por el Organismo Canadiense de Aduanas e Ingresos Fiscales del Canadá, y para los casos de incumplimiento intencionados se prevén penas de hasta 10 años de prisión o multas sin limitación de la cantidad.

El Canadá ha reforzado sus normas sobre seguridad nuclear para hacer frente a las nuevas amenazas surgidas a partir del 11 de septiembre de 2001. Las normas más estrictas aplicadas por la Comisión de Seguridad Nuclear del Canadá se aplican a los radioisótopos y los materiales nucleares peligrosos que puedan ser una amenaza para la vida de personas inocentes. El Canadá también apoya y respalda plenamente la labor del Grupo de los Ocho y del Organismo Internacional de Energía Atómica de crear normas internacionales sobre seguridad de las fuentes radiactivas. El Canadá está trabajando para conseguir la aplicación plena del Código de Conducta sobre la seguridad tecnológica y física de las fuentes radiactivas adoptado en septiembre de 2003 y alienta a otros países a hacer lo mismo. El 21 de enero de 2004, el Canadá comunicó oficialmente al Organismo Internacional de Energía Atómica su apoyo al Código. Debe hacerse todo lo posible para evitar la duplicación y armonizar las iniciativas existentes en este ámbito. La labor de las Naciones Unidas en pro de una aplicación internacional del Código debe centrarse en el apoyo al trabajo del Organismo Internacional de Energía Atómica en ese ámbito. El Canadá está convencido de que el Organismo, con su experiencia y conocimientos técnicos, debe seguir dirigiendo la labor internacional en la materia. El Canadá también apoya la labor que está llevando a cabo el Organismo Internacional de Energía Atómica de elaborar directrices sobre la importación y exportación de fuentes radiactivas de conformidad con el Código de Conducta. Con ella se fomenta efectivamente la aplicación de la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

1.9 El Comité contra el Terrorismo desearía recibir del Canadá información respecto de las actividades de lucha contra el terrorismo, en particular, una descripción de los programas previstos, los organismos participantes y los mecanismos destinados a garantizar la coordinación interinstitucional en las diversas esferas señaladas en los párrafos 2 y 3 de la resolución.

Reclutamiento de terroristas

Junto a otras disposiciones, la Ley de lucha contra el terrorismo establece medidas para proceder contra los responsables de actividades terroristas. También proporciona a los órganos de seguridad nacional nuevos instrumentos de investigación.

Una parte esencial de esa Ley es la competencia del Gobierno para elaborar una lista de entidades. Según el Código Penal, el Gobernador del Consejo, previa recomendación del Procurador General del Canadá, podrá establecer una lista de entidades si considera que existen razones fundadas para sospechar que tales entidades, a sabiendas, han realizado, intentado o facilitado actividades terroristas o participado en ellas; o que, con conocimiento de causa, actúan en nombre o bajo la dirección de entidades que, a sabiendas, hayan realizado, intentado o facilitado actividades terroristas o participado en ellas, o en asociación con dichas entidades.

El Gobierno del Canadá sigue la política de no comentar el modo en que sus organismos de seguridad e inteligencia realizan sus operaciones; no obstante, a continuación se recoge la lista de entidades terroristas (a fecha de 12 de enero de 2004) establecida a los efectos de la Parte II.1 del Código Penal:

- Armed Islamic Group;
- Salafist Group for Call and Combat;
- Al Jihad;
- Vanguard of Conquest;
- Al-Gama'a al-Islamiyya;
- Al-Qaida;
- Al-Ittihad Al-Islam;
- Islamic Army of Aden;
- Harakat ul-Mudjahidin;
- Asbat Al Ansar;
- Palestinian Islamic Jihad;
- Jaish-e-Mohammed;
- Hamas;
- Kurdistan Workers Party;
- Aum Shinrikyo;
- Hizballah;
- Abu Nidal Organization;
- Abu Sayyaf Group;

- Sendero Luminoso;
- Jemaah Islamiyyah;
- Islamic Movement of Uzbekistan;
- Euskadi Ta Askatasuna;
- AL-Aqsa Martyrs' Brigade;
- Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia;
- Autodefensas Unidas de Colombia;
- Ejército de Liberación;
- Babbar Khalsa;
- Babbar Khalsa International;
- International Sikh Youth Federation;
- Lahkar-e-Tayyivba;
- Lashkar-e-Thangvi;
- Palestine Liberation Front;
- Popular Front for the Liberation of Palestine; y
- Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command.

La enumeración completa de las entidades incluidas en la lista del Código Penal puede consultarse en las siguientes direcciones electrónicas:

http://www.psepc.gc.ca/national_security/counter-terrorism/AntiTerrorism_e.asp

http://www.psepc-sppcc.gc.ca/national_security/counter-terrorism/Entities_f.asp

La Ley de lucha contra el terrorismo también tipifica delitos específicos relativos a las siguientes actividades:

- Financiar el terrorismo (artículos 83.02, 83.03 y 83.04 del Código Penal);
- Negociar con activos de entidades incluidas en la lista y dejar de informar sobre activos congelados a las autoridades competentes (artículos 83.08, 83.1 y 83.11 del Código Penal);
- Participar en las actividades de grupos terroristas (artículo 83.18 del Código Penal);
- Facilitar actividades terroristas (artículo 83.19 del Código Penal);
- Ordenar la realización de actividades terroristas (artículos 83.21 y 83.22 del Código Penal del Canadá); y
- Dar refugio u ocultar a terroristas (artículo 83.23 del Código Penal).

Rastreo de vínculos entre actividades delictivas (en especial el tráfico de drogas y el terrorismo)

El Canadá cuenta con diversos mecanismos y estructuras para garantizar la cooperación entre las autoridades encargadas del control financiero, la seguridad y la

represión del tráfico de drogas. Se han celebrado acuerdos y memorandos de entendimiento en materia de inteligencia y seguridad entre diversos organismos canadienses, como el Organismo de Servicios de Fronteras (CBSA), el Servicio de Inteligencia y Seguridad, la Real Policía Montada y el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras del Canadá (FINTRAC).

En el informe anterior (S/2002/667) puede consultarse una descripción de la coordinación interinstitucional y los mecanismos operacionales específicos, tales como el Índice de Información para la Vigilancia Legal (EII), los Equipos Integrados de Seguridad Nacional (INSETS), la Iniciativa Integrada de Información Judicial (IJII), la Red de Seguridad Pública del Canadá (CPSN), y los Equipos Integrados de Vigilancia Legal (IBETS).

Denegación de refugio a terroristas, así como de formas de apoyo activo o pasivo a terroristas o grupos terroristas, incluido entre otros, el apoyo logístico (por ejemplo, la utilización de la infraestructura mundial de información)

Corresponde al Organismo de Ciudadanía e Inmigración del Canadá (CIC) y al Organismo de Servicios de Fronteras garantizar, junto con otros colaboradores, que los extranjeros que quieran entrar en el Canadá cumplan los criterios de admisibilidad establecidos en la Ley de inmigración y protección de los refugiados. Por ejemplo, las personas que solicitan la residencia permanente o el estatuto de refugiado son objeto de un examen de seguridad al igual que algunos residentes temporales (visitantes).

El Servicio de Inteligencia y Seguridad del Canadá, que es un colaborador importante tanto del Organismo de Inmigración y Ciudadanía como del de Servicios de Fronteras, introduce información en una base de datos que alerta a los agentes de inmigración y aduanas en los puertos de entrada de las amenazas a la seguridad nacional planteadas por terroristas presuntos y conocidos que tratan de entrar en el Canadá. La información del Servicio de Inteligencia y Seguridad permite a las autoridades canadienses denegar solicitudes de individuos sospechosos de participar en actividades terroristas, impidiéndoles en la práctica la entrada al Canadá.

El Organismo de Servicios de Fronteras desempeña un papel central en la labor de proteger la integridad del sistema de inmigración y refugiados, y de denegar refugio a presuntos terroristas. Este Organismo identifica, detiene y expulsa a quienes no reúnen las condiciones para permanecer en el Canadá, por razones de seguridad o delincuencia (incluido el terrorismo), o para considerarse refugiado según las convenciones en la materia.

El Canadá ha puesto en marcha procedimientos mediante los que la información del manifiesto de pasajeros de las líneas aéreas se transmite electrónicamente a los puertos de entrada previamente a la llegada del vuelo. De este modo los agentes del Organismo de Servicios Fronteras pueden identificar a las personas sobre las que sea necesario realizar nuevas comprobaciones después de su llegada.

El Organismo de Servicios de Fronteras y el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos actúan de modo coordinado en el control de las fronteras, intercambiando información sobre los pasajeros de los vuelos, dentro de los límites de sus respectivas disposiciones legales sobre el derecho a la intimidad. El Centro Nacional de Evaluación del Riesgo se ha creado para que el Canadá y los Estados Unidos puedan detectar e impedir la entrada a viajeros de alto riesgo que se dirijan a cualquiera de estos dos países. El Centro comenzó a funcionar en enero de 2004.

1.10 Sírvase indicar de qué técnicas especiales dispone el Canadá para investigar casos de terrorismo (interceptación de comunicaciones, vigilancia electrónica, observación, operaciones secretas, entregas controladas, adquisiciones ficticias o medios electrónicos de escucha de instalaciones privadas o públicas, entre otras). Sírvase indicar si estas técnicas 1) sólo pueden utilizarse contra sospechosos, 2) sólo pueden aplicarse previa autorización de un tribunal.

Los organismos canadienses de seguridad disponen de múltiples técnicas especiales de investigación para casos relacionados con el terrorismo, dependiendo de las circunstancias de cada caso, el tipo de investigación de que se trate y el organismo que lleve a cabo la investigación. Entre esas técnicas figuran la vigilancia electrónica, el registro y la confiscación, la vigilancia personal o secreta, el uso de informadores anónimos, las entregas controladas y otras actividades de investigación que, en circunstancias diferentes, serían constitutivas de delito. Ese tipo de actividades encuentran fundamento jurídico concreto en varias leyes y decisiones judiciales, aunque las principales disposiciones en la materia figuran en la Carta canadiense de derechos y libertades y en el Código Penal (parte VI, relativa a la vigilancia electrónica; parte XV, relativa al registro y la confiscación, y artículos 25 y 25.4, relativos a la justificación a efectos de investigación de actos que de otro modo serían ilícitos). Con excepción de la vigilancia electrónica en asuntos penales (véase *infra*), todos los medios de investigación podrán utilizarse en cooperación con otros Estados en respuesta a peticiones de asistencia judicial mutua en materia penal o según lo dispuesto en otros acuerdos o convenios en materia de seguridad.

El uso de técnicas especiales de investigación en el Canadá está sujeto a garantías sustantivas y procesales. Las normas que se aplican varían dependiendo de si la investigación la realiza un organismo de policía para facilitar el enjuiciamiento de un delito u otro tipo de conducta punible o si la lleva a cabo un organismo de seguridad para proteger la seguridad del país. Dentro del ordenamiento jurídico general, las normas aplicables dependen también de la técnica que se utilice y de las circunstancias en que tenga lugar la investigación. La norma que sirve de base a todos estos fundamentos jurídicos y garantías específicas es la Carta canadiense de derechos y libertades. Dicha Carta protege a todos los que se hallen en el Canadá frente a registros o confiscaciones injustificados, lo que exige que las operaciones de vigilancia electrónica y de registro y confiscación ordinarios cumplan los requisitos básicos que justifican este tipo de actividades. Entre esos requisitos destaca la obligación de disponer de una autorización previa para realizar operaciones de registro o confiscación, que será concedida por un funcionario judicial independiente que, cuando proceda, podrá limitar su alcance y disponer el modo en que habrán de realizarse. Existe una excepción limitada a esta norma básica, que se aplicará en casos de emergencia o de fuerza mayor. Otros derechos, en particular el derecho a un proceso penal con las debidas garantías, exigen que los acusados dispongan de cualquier información que pueda declararse reservada; no obstante, si la información no se hace pública, el acusado podrá solicitar el sobreseimiento de la causa.

Vigilancia electrónica. En el Canadá, el término “interceptación de comunicaciones privadas” incluye todas las formas de vigilancia electrónica, tanto si la comunicación es interceptada cuando circula por un sistema o red de comunicaciones como si se utilizan medios electrónicos para escuchar una conversación en un emplazamiento determinado. Si existen expectativas razonables de que deba respetarse la privacidad de la comunicación, la interceptación será constitutiva de delito a no ser que esté amparada en una excepción prevista en la ley.

La parte VI del Código Penal permite realizar actividades de vigilancia electrónica para investigar los delitos previstos en la ley, siempre que se disponga de autorización judicial previa. En la lista de delitos que pueden dar pie a este tipo de actividades figuran todos los delitos graves y todos los delitos que la ley califica de “actividades terroristas”. Sólo se podrán conceder autorizaciones judiciales a funcionarios especialmente capacitados, y tanto la ley como los tribunales limitan en el espacio y en el tiempo la realización de esas actividades. Uno de los requisitos es que la vigilancia electrónica sólo se utilice como último recurso cuando los métodos que se emplean para investigar los delitos comunes no hayan dado resultado o sea poco probable que lo den, aunque dicho requisito no se aplica a los delitos relacionados con organizaciones delictivas ni a los delitos de terrorismo. Normalmente, la vigilancia electrónica se autoriza por un plazo máximo de 60 días, aunque en el caso de delitos de terrorismo este plazo podrá ampliarse hasta un año, y, en ambos casos, los tribunales podrán renovar la autorización cuando las circunstancias lo requieran. Asimismo, podrán obtenerse rápidamente autorizaciones a corto plazo en casos de emergencia o de fuerza mayor.

Por su parte, la Ley del servicio de inteligencia y seguridad del Canadá regula de forma independiente las actividades de vigilancia electrónica. Las órdenes previstas en esta Ley también deberán ser expedidas por un juez, aunque podrán solicitarse de modo más general cuando se investiguen amenazas a la seguridad del Canadá o se ejerciten las demás funciones y obligaciones descritas en la Ley. Las órdenes previstas en la Ley sólo podrán ser concedidas por determinados jueces de la Corte Federal del Canadá y, a diferencia de los procedimientos que se regulan en el Código Penal, las órdenes emitidas en virtud de la Ley podrán referirse a la vigilancia electrónica, al registro y la confiscación o a ambas cosas. Las órdenes de interceptación de comunicaciones se concederán por un período de 60 días o de un año, dependiendo de la naturaleza de la investigación, y podrán renovarse cuando las circunstancias lo requieran. El Órgano de Seguridad de las Comunicaciones, que recopila datos confidenciales procedentes de las infraestructuras mundiales de información y asesora al Gobierno del Canadá sobre la seguridad de las comunicaciones, también está facultado para realizar actividades de vigilancia electrónica.

Tanto el Código Penal como la Ley del servicio de inteligencia y seguridad del Canadá permiten que se lleve a cabo la vigilancia electrónica de personas conocidas o desconocidas, siempre que la información que se facilite al juez que emita la orden sea suficientemente específica y se incluya en la orden o autorización de modo que se limite el alcance de la vigilancia. Asimismo, las actividades de vigilancia podrán realizarse en cualquier lugar siempre que se delimite claramente, incluidos espacios públicos y “viviendas particulares”. El Código Penal contempla garantías adicionales cuando las comunicaciones que se intercepten sean las mantenidas entre un abogado y su cliente, que gozan de protección especial. Según las circunstancias, si estas actividades se realizan en un lugar suficientemente público o se informa con antelación a quienes participen en ellas podrían no existir expectativas de privacidad, por lo que tampoco existirían restricciones para la grabación de las comunicaciones. El Código Penal permite realizar actividades de vigilancia electrónica únicamente para investigar delitos tipificados en él que hayan sido cometidos en el Canadá. Entre esos delitos destacan los de terrorismo y otros delitos conexos cometidos en aeronaves o buques canadienses, o los que habiéndose perpetrado en otro lugar se consideren cometidos en el Canadá. Sin embargo, estas actividades no podrán realizarse en respuesta a una petición de asistencia judicial por delitos cometidos en otros

países. En cuanto al Servicio de Inteligencia y Seguridad del Canadá, realiza actividades de vigilancia electrónica para investigar amenazas a la seguridad del Canadá o para obtener datos o información confidencial, para lo que, en ocasiones, puede colaborar con otros Estados si las circunstancias lo aconsejan. Ambas leyes contienen disposiciones que permiten mantener en secreto la identidad de los informadores (véase *infra*) y otra información confidencial utilizada por el juez al emitir la orden o autorización.

Registro y confiscación. Los organismos de seguridad canadienses están facultados para registrar y confiscar cualquier cosa que pueda ser utilizada como prueba en un asunto penal, así como una variedad de otros artículos determinados, como el producto del delito y otros bienes relacionados con el delito, armas, estupefacientes y sustancias sicotrópicas, bienes producto del contrabando y material nuclear. El Código Penal regula, con carácter general, las actividades de registro y confiscación destinadas a obtener pruebas, y tanto éste como otras leyes contienen normas específicas por razón del objeto. Normalmente es necesario obtener una autorización judicial previa que deberá estar debidamente fundamentada y determinar los bienes que podrán ser objeto de registro y confiscación, así como el lugar donde podrán realizarse este tipo de actividades y los límites a que habrán de atenerse, aunque en casos de emergencia o de fuerza mayor podrán efectuarse registros limitados sin orden judicial. El Servicio de Inteligencia y Seguridad del Canadá podrá investigar cualquier dato, inscripción, documento o bien. Asimismo, podrá retirarlos y devolverlos a su emplazamiento original, examinarlos, tomar extractos de ellos, realizar copias o reproducirlos de cualquier otra forma. Estas operaciones deberán estar justificadas por las mismas razones que la vigilancia electrónica y estarán sujetas a idénticas limitaciones.

Empleo de agentes secretos. No existen restricciones legales al desempeño de actividades policiales o de seguridad por agentes de paisano o sin uniforme, ni a la capacidad de los agentes para fingir que participan en actividades ilícitas con el fin de reunir información o pruebas. En cada organismo existen órdenes o directrices internas que regulan la realización de determinados tipos de operaciones, que, no obstante, no limitan de forma general la posibilidad de utilizar las técnicas citadas.

Anonimato y protección de los informadores. Los organismos de policía y seguridad del Canadá podrán proteger el anonimato de los informadores cuando resulte necesario. Tal protección se dispensa por cauces administrativos y, en general, sólo adquiere una dimensión legal cuando la información sirve de base para solicitar una orden de registro o una autorización de vigilancia electrónica. En esos casos, lo habitual es que el abogado defensor tenga acceso a las declaraciones juradas y pueda interrogar al informador principal, que normalmente es un investigador, aunque no tendrá derecho a interrogar a los informadores confidenciales. Cuando sea necesario preservar el anonimato, el tribunal podrá ordenar que se sellen los documentos utilizados para obtener órdenes generales de registro conforme al Código Penal. Los documentos que se utilicen para obtener una autorización de vigilancia electrónica con arreglo al Código Penal permanecerán sellados y, de ser entregados al abogado defensor, serán editados previamente por un juez para ocultar la identidad de los informadores confidenciales y cualquier otra información que permita identificarlos. Las técnicas de investigación empleadas al amparo de órdenes emitidas con arreglo a la Ley de inteligencia y seguridad del Canadá no podrán utilizarse en asuntos penales, por lo que no se plantea la cuestión de si los abogados defensores tienen acceso a ellas. Las órdenes las emiten determinados jueces de la Corte Federal del

Canadá y sólo estarán sujetas a una revisión confidencial e independiente. Todas las medidas que permiten impedir la divulgación de la identidad de los informadores y otros datos se entenderán sin perjuicio de los derechos que se reconocen a quienes hayan sido acusados de un delito. Cuando la denegación de acceso a información confidencial vulnere alguno de los derechos reconocidos en la Carta canadiense de derechos y libertades y no obedezca a principios fundamentales de justicia, los perjudicados por ello podrán instar la suspensión del procedimiento.

Utilización de entregas controladas y “delitos ficticios”. El Código Penal del Canadá fue modificado en 2001 para especificar que los agentes de policía y otros funcionarios podrán realizar actividades que, en otras circunstancias, serían constitutivas de delito cuando éstas se realicen en el marco de una investigación y se cumplan determinados requisitos. Sólo funcionarios adiestrados y previamente seleccionados podrán realizar actividades tales como la entrega controlada de sustancias ilícitas, que deberán ser previamente aprobadas por un superior jerárquico. Este tipo de actividades excepcionales deberán estar justificadas y no conllevarán inmunidad absoluta: las acciones deberán ser razonables y adecuarse al delito que se investiga; la autorización no facultará para cometer delitos que puedan provocar la muerte, delitos sexuales o de obstrucción de la justicia, y los delitos relacionados con los estupefacientes se regirán por normas diferentes. La disposición que permite realizar este tipo de actividades ampara a cualquier “funcionario público” que haya sido previamente seleccionado, como por ejemplo agentes de la policía federal, provincial y municipal, del Servicio de Inteligencia y Seguridad del Canadá y de otros departamentos u organismos del gobierno federal o de un gobierno provincial facultados para realizar actividades investigadoras o de seguridad. La disposición también incluye, de manera más limitada, los actos de quienes no sean “funcionarios públicos”, como los informadores civiles. Quien realice la actividad deberá tener motivos fundados para creer que actúa a instancias de un funcionario público facultado para ello y que la finalidad del acto es contribuir a que dicho funcionario cumpla sus funciones en materia de seguridad.

Persecuciones transfronterizas. La legislación canadiense no reconoce facultades extraterritoriales al personal de seguridad del Canadá que se adentre en el territorio de otros países en el curso de una persecución ni otorga facultades ni protección al personal extranjero que penetre en el Canadá. En la frontera entre el Canadá y los Estados Unidos se dan situaciones de persecución continuada, que se rigen por los acuerdos existentes entre las autoridades de seguridad correspondientes y, en su caso, por criterios discrecionales. Si es preciso practicar una detención para impedir la huida de un sospechoso o evitar males mayores, los funcionarios de seguridad extranjeros que hayan penetrado en el territorio del Canadá tendrán las mismas atribuciones que un civil canadiense. Podrá detenerse, haciendo un uso razonable de la fuerza, a quienes se hubiera sorprendido cometiendo un delito grave o fueran objeto de persecución, siempre que el detenido sea entregado inmediatamente a un funcionario de la policía canadiense.

Incitación a la comisión de un delito. Los investigadores penales del Canadá podrán inducir a engaño a sospechosos, aunque la incitación a cometer un delito podrá utilizarse como argumento válido en defensa de quien haya sido acusado de cometerlo. En el derecho canadiense, la incitación tiene lugar cuando los investigadores alientan o inducen efectivamente a un sospechoso a cometer un delito o simplemente le brindan la oportunidad de cometerlo sin que existan motivos fundados para sospechar que sus intenciones al respecto fueran delictivas o inapropiadas.

Los organismos de seguridad e inteligencia podrán utilizar varias técnicas de investigación que se recogen en la ley. La concesión de facultades especiales de investigación deberá ser sancionada por los tribunales.

El Gobierno del Canadá no acostumbra a hacer comentarios sobre el modo en que actúan sus organismos de seguridad e inteligencia o sobre cómo utilizan las técnicas especiales de investigación previstas en la ley.

1.11. Con el fin de poner a los terroristas y a quienes los apoyan a disposición de la justicia, sírvase indicar si el Canadá ha tomado medidas para proteger a quienes ocupan posiciones vulnerables en el enjuiciamiento de los casos de terrorismo, como por ejemplo, las víctimas, quienes colaboran con la administración de justicia y los testigos, jueces y fiscales. Sírvase describir las disposiciones legales y administrativas vigentes en el Canadá por las que se garantiza esa protección. ¿Puede señalar el Canadá si esas medidas pueden utilizarse en cooperación con otros Estados o a propuesta de éstos?

La Ley sobre el programa de protección de testigos del Canadá ofrece una amplia gama de medidas para proteger a las personas que ocupan posiciones vulnerables. Sus disposiciones protegen a quienes se ven afectados por asuntos de terrorismo, aunque también se aplican en procedimientos relacionados con otros delitos. Quienes participen o accedan a participar en procesos penales y otras personas que puedan correr peligro, como los miembros de sus familias, podrán ser protegidos. La Ley también contempla la posibilidad de celebrar acuerdos o convenios recíprocos con otros países para que quienes se encuentren en el Canadá puedan ser enviados al extranjero y viceversa. El Canadá examinará caso por caso las peticiones procedentes del extranjero que se basen en esta disposición. La Ley establece los requisitos que han de cumplirse para poder acogerse a programas de protección a largo plazo, así como medidas de emergencia que pueden aplicarse mientras se toman las medidas a largo plazo. También debe destacarse que no es necesaria ninguna autorización legal específica para tomar la mayoría de las medidas inmediatas destinadas a proteger a los testigos, a quienes participen en los procedimientos o a otras personas que puedan correr peligro. Los organismos de seguridad del Canadá podrán tomar, y así lo harán, las medidas apropiadas que estimen oportunas.

El Programa Federal de Protección de Testigos del Canadá es gestionado por la Real Policía Montada del Canadá. Los organismos provinciales y municipales también disponen de programas de protección de testigos y podrán recabar la asistencia de las autoridades federales para obtener documentos cuando lo estimen oportuno. La Real Policía Montada del Canadá coopera con otros departamentos federales para facilitar documentos federales a los testigos que se hayan acogido a programas confidenciales de cambio de identidad. Por regla general, los testigos se acogen al programa al concluir la investigación, momento en que su identidad suele darse a conocer al acusado, ya que es uno de los datos que la ley obliga a hacer públicos antes del juicio. No obstante, si en cualquier momento se identifica alguna amenaza, el testigo podrá acogerse al programa mediante las disposiciones de emergencia existentes al efecto o con arreglo al procedimiento ordinario. Las modificaciones introducidas en 2001 en la Ley de lucha contra el terrorismo permiten impedir la divulgación de información reservada o que pueda ser lesiva, categoría en la que podría incluirse cualquier dato que permitiera identificar a un informador o un testigo. Los testigos que presten declaración no podrán hacerlo anónimamente y cuando exista

información que no pueda divulgarse el tribunal arbitrará medios que garanticen el derecho del acusado a un juicio con las debidas garantías.

Entre las medidas de protección, que se basan en la evaluación de las amenazas, destacan el ofrecimiento de protección personal y el traslado de la persona a otro lugar mientras subsista la amenaza. En casos más graves, la persona puede ser trasladada con carácter definitivo y recibir una nueva identidad. El traslado incluye la prestación de ayuda en el nuevo lugar de residencia. Cuando las circunstancias lo requieran, también podrá ofrecerse asesoramiento y ayuda para buscar un alojamiento seguro.

1.12. El Comité agradecería que el Canadá describiera los procedimientos legales y los mecanismos administrativos que permiten a los distintos organismos gubernamentales que participan en la investigación de actividades terroristas, en especial las relacionadas con la financiación del terrorismo, cooperar e intercambiar información eficazmente. ¿Permiten las disposiciones jurídicas en vigor que las autoridades administrativas intercambien información pública y no pública sobre la lucha contra el terrorismo con sus homólogos nacionales y extranjeros?

El Canadá ha comenzado a establecer procedimientos administrativos para intercambiar información sobre iniciativas de financiación del terrorismo. Los organismos de seguridad e inteligencia disponen de mecanismos, tanto legislativos como administrativos, para intercambiar información con autoridades nacionales y asociados en el extranjero.

Existe un comité interdepartamental, inicialmente creado para facilitar la elaboración de listas de entidades y la congelación de activos e integrado por numerosos departamentos y organismos, que se reúne periódicamente y que ha ampliado sus funciones para incluir el intercambio de información y estrategias sobre elaboración de listas y congelación de activos, así como la identificación de lagunas normativas y de los programas en la lucha contra la financiación del terrorismo.

Asimismo, el Canadá participa activamente en varios organismos y organizaciones internacionales dedicados a la lucha contra la financiación del terrorismo. Para garantizar la coordinación de la postura del Canadá en esos foros se celebran periódicamente reuniones y consultas interdepartamentales entre los miembros de las delegaciones.

En ciertos casos, el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras del Canadá (FINTRAC) podrá divulgar determinados datos extraídos del análisis de los informes recibidos y de información procedente de otras fuentes, como bases de datos públicas y gubernamentales (esa información puede clasificarse del siguiente modo: 1) información que permita identificar a la persona o la empresa de que se trate (incluida información contable), 2) datos sobre las transacciones, y 3) datos de las instituciones en las que se realizaron las transacciones).

- El Centro deberá informar al servicio de la policía correspondiente cuando tenga motivos fundados para sospechar que esa información podría ser pertinente para la investigación o el enjuiciamiento de un delito de blanqueo de dinero o de financiación del terrorismo.
- El Centro deberá informar al Servicio de Inteligencia y Seguridad del Canadá cuando tenga motivos fundados para sospechar que la información podría ser relevante en relación con posibles amenazas a la seguridad del Canadá.

Cuando el FINTRAC tenga motivos fundados para sospechar de la existencia de un delito de blanqueo de dinero o de financiación del terrorismo, deberá comunicar la información de que se trate a:

- El Organismo de Aduanas e Ingresos Fiscales del Canadá, cuando la información también se considere pertinente a efectos de un delito de evasión, consumada o en grado de tentativa, de impuestos o contribuciones federales;
- El Organismo de Ciudadanía e Inmigración del Canadá, cuando la información también se considere pertinente a efectos de determinadas disposiciones de la Ley de inmigración y protección de los refugiados;
- Las dependencias de información financiera extranjeras con las que haya concluido un memorando de entendimiento que contemple ese intercambio de información. El FINTRAC también podrá solicitar a esas dependencias información adicional conforme a lo establecido en esos memorandos. El FINTRAC ha concluido memorandos de entendimiento con los Estados Unidos, el Reino Unido, México, Bélgica, Australia, Barbados e Italia.

Una vez que el FINTRAC haya divulgado la información, ésta dejará de estar sujeta a los requisitos de la Ley sobre el producto del delito (blanqueo de dinero) y la financiación del terrorismo, aunque sí lo estará a las restricciones legales aplicables al organismo o departamento a quien se haya comunicado, incluidas las que imponen la Ley de protección de la intimidad y, cuando resulte aplicable, la Ley de seguridad de la información.

Los múltiples departamentos y organismos que integran la administración pública del Canadá participan en la prevención e investigación del terrorismo y los asuntos conexos a nivel de gobierno federal, provincial y local. Entre ellos figuran los organismos de policía y de seguridad nacional, los fiscales generales federal y provinciales y los departamentos federales y provinciales de salud, transporte e inmigración, entre otros. Dentro de este esquema, existen varios acuerdos para la consulta y el intercambio de información con otros departamentos competentes que van desde comités creados formalmente por ley o en virtud de competencias legislativas delegadas a acuerdos oficiosos y especiales para intercambiar información o cooperar cuando resulte necesario en función de cada caso. Dentro de estos comités interdepartamentales y grupos de trabajo hay varios órganos mixtos de ámbito federal y provincial que se ocupan de cuestiones normativas y operacionales.

Conforme al derecho canadiense, la información que obra en poder de cualquier organismo público puede pertenecer a tres categorías básicas. La información pública, que procede de fuentes de acceso general como los medios de comunicación y las declaraciones públicas de los funcionarios, goza de una amplia difusión y no está sujeta a restricciones legales. Las otras dos categorías, información personal e información confidencial, poseen distintos grados de confidencialidad y están sujetas a normas jurídicas que prohíben la publicación o divulgación si bien contemplan excepciones sobre determinadas circunstancias en las que sí podrán divulgarse. En este contexto general, varias leyes canadienses incluyen disposiciones específicas que prohíben la divulgación, regulan varios tipos concretos de información y establecen a quién podrá revelarse y en qué circunstancias, aunque es poco probable que puedan aplicarse a casos relacionados con el terrorismo.

En cuanto a la información pública, la mayoría de los departamentos del gobierno, incluidos la Real Policía Montada del Canadá y el Servicio de Inteligencia y

Seguridad del Canadá, disponen de una página en la Internet con información, que puede consultarse y descargarse, sobre sus mandatos e iniciativas. En esas páginas se dan a conocer los resultados de investigaciones públicas, se consulta a los ciudadanos canadienses y se ofrece información básica sobre los organismos, sus funciones y cómo ponerse en contacto con ellos. Las páginas en la Internet de la Real Policía Montada del Canadá y del Servicio de Inteligencia y Seguridad del Canadá también incluyen información sobre cómo ponerse en contacto con sus respectivos órganos independientes de supervisión para hacerles llegar sugerencias o formular quejas concretas. Asimismo, todos los departamentos del gobierno tienen oficinas de relaciones con los medios de comunicación que se utilizan para transmitir información a esos medios y divulgar comunicaciones dirigidas al público en general.

La información personal, consistente en datos sobre personas identificables que obran en poder de las instituciones públicas, plantea cuestiones de privacidad y está sujeta a la Ley federal de protección de la intimidad o a normas similares existentes en las provincias y los territorios. Esa información puede ser recopilada y retenida para fines específicos por determinados organismos y sólo podrá utilizarse para fines distintos o comunicarse a otros organismos con el consentimiento del interesado o en los casos previstos en la Ley. Entre la información que podrá intercambiarse figura la revelada por orden de un tribunal, la comunicada a un órgano investigador o en el marco de un procedimiento judicial y la transmitida en virtud de un acuerdo o convenio entre el Gobierno del Canadá y una provincia, otro país o una organización intergubernamental "... con el fin de aplicar o hacer cumplir una ley o realizar una investigación lícita".

La información confidencial, cuya comunicación podría menoscabar la seguridad o intereses esenciales del Estado, también está protegida por la Ley de seguridad de la información. El intercambio de este tipo de información podrá autorizarse en circunstancias apropiadas, como por ejemplo en casos relacionados con el terrorismo. En algunos casos, las leyes federales por las que se regulan determinados organismos establecen regímenes de información más específicos que se aplican únicamente a esos organismos y a la información que obre en su poder. A este respecto cabe mencionar las normas por las que se rigen la Real Policía Montada del Canadá, el Servicio de Inteligencia y Seguridad del Canadá y el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieros del Canadá.

La información obtenida por la Real Policía Montada del Canadá y obrante en su poder se utiliza con arreglo a lo dispuesto en la Ley de protección de la intimidad. La información recabada y mantenida por el Servicio de Inteligencia y Seguridad del Canadá está sujeta al artículo 19 de la Ley por la que se regula este Servicio, que prohíbe su revelación salvo en los casos concretos que se especifican en la Ley. La información podrá ser revelada cuando sea necesario para el cumplimiento de los deberes y las funciones que la citada Ley impone al Servicio. También podrá revelarse la información con otros fines, entre ellos, la investigación y el enjuiciamiento de delitos y la adopción de medidas en materia de relaciones exteriores o defensa nacional. La información podrá comunicarse más ampliamente en el contexto de la administración pública cuando el Fiscal General considere que existen razones esenciales de interés público que lo justifican y siempre que las ventajas de su revelación superen los inconvenientes que pueda causar la consiguiente invasión de la intimidad. Hay estudios e investigaciones que no plantean problemas de violación del derecho a la intimidad o seguridad, por lo que muchos de ellos, referidos entre otros

temas al terrorismo, han sido puestos a disposición del público mediante la página del Servicio de Información y Seguridad del Canadá en la Internet.

La Carta canadiense de derechos y libertades, verdadera declaración constitucional de derechos del país, consagra también el derecho a la intimidad y regula la obtención y uso de la información, las personas a las que podrá comunicarse y la finalidad que habrá de perseguir su intercambio. Las normas concretas dependen en gran medida de las circunstancias del caso aunque, en general, si existen expectativas razonables sobre el carácter privado de la información se aplicarán restricciones en relación con su obtención, tales como la obligación de contar con una autorización previa concedida por un funcionario judicial independiente para poder realizar actividades de vigilancia electrónica y de registro y confiscación. También existen límites sobre la comunicación y el uso de la información y, en algunos casos, la información que se obtenga para un fin justificado no podrá utilizarse ni revelarse para otro distinto, a no ser que se reconsideren las circunstancias del asunto y se cumplan ciertas garantías previas que deberán especificarse por ley. Por ejemplo, según la legislación canadiense de lucha contra el terrorismo, si existen motivos fundados para creer que se ha cometido, o puede cometerse, un delito de terrorismo, los tribunales podrán ordenar, en el marco de sus investigaciones, que determinadas personas comparezcan para prestar declaración. Sin embargo, estas medidas no podrán aplicarse en investigaciones penales comunes y la información que se obtenga en ese contexto no podrá utilizarse posteriormente para procesar a la persona obligada a revelarla. Los regímenes legislativos y administrativos para el intercambio de información en el Canadá se ajustan a estos principios básicos de la Carta y los nuevos proyectos de ley son examinados antes de someterlos al Parlamento para comprobar su conformidad con ellos. El derecho canadiense también regula el intercambio o la revelación de información en situaciones de fuerza mayor (emergencia).

Las modernas tecnologías de la información desempeñan una función cada vez mayor y más importante en el intercambio de información en el Canadá. Tal como se ha señalado, la mayoría de los departamentos y organismos públicos canadienses disponen actualmente de páginas de acceso general en la Internet. Esas páginas permiten dar gran difusión a la información y la mayoría también ofrecen información sobre cómo ponerse en contacto con el departamento u organismo en cuestión o, en caso de que exista, con su órgano independiente de supervisión. Algunos también permiten el envío de información por correo electrónico, utilizando tecnologías de cifrado adecuadas para proteger la privacidad y la seguridad. Cuanto más avanzan las tecnologías de la seguridad en la Internet, más seguros son los sitios y las redes de correo electrónico que se utilizan para intercambiar la información más confidencial. Una de las principales redes del país es la del Centro Canadiense de Información Policial, que desde 1972 gestiona la Real Policía Montada del Canadá. Dicho Centro mantiene una base de datos segura que contiene información en materia de seguridad a la que tienen acceso todos los organismos de policía del Canadá y otros organismos de seguridad federales y provinciales autorizados. Sus bases de datos pueden consultarse para obtener información sobre personas de interés, vehículos y otros datos, y los participantes en el sistema pueden añadir nueva información e intercambiarla bilateralmente en un entorno seguro. Actualmente el citado Centro está siendo modernizado para ampliar sus capacidades y permitir que organismos no policiales, como los de aduanas e inmigración, accedan a la información que contiene.

También existen bases de datos, páginas en la Internet y otros sistemas de alcance más restringido que cuentan con medidas de seguridad adecuadas y permiten a

los departamentos, organismos o funcionarios individuales intercambiar la información que necesiten. En su mayoría, estos sistemas permiten a los usuarios enviar y recibir información. Muchos de ellos, incluido el Centro Canadiense de Información Policial, están a disposición de los funcionarios competentes a nivel federal, provincial y municipal, y algunos permiten acceder a ellos, a los organismos de seguridad u otras autoridades del extranjero.

Procedimientos legales y mecanismos administrativos para la cooperación y el intercambio de información entre los organismos gubernamentales canadienses que participan en la investigación de actividades terroristas, en especial las relacionadas con la financiación del terrorismo, y sus homólogos extranjeros

Por regla general, el intercambio de información con funcionarios públicos de otros países se rige por los mismos principios jurídicos que protegen la intimidad y regulan la revelación de la información a nivel nacional. Además, son de aplicación los instrumentos jurídicos internacionales en los que el Canadá es parte y, con carácter discrecional, los principios de soberanía nacional, protección de los intereses esenciales y reciprocidad. En el Canadá, los tratados no son directamente aplicables por lo que deben ser incorporados en el ordenamiento interno mediante los procedimientos legislativos y administrativos correspondientes. El Canadá es parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y en los otros 12 instrumentos jurídicos internacionales contra el terrorismo, e intercambia información en el marco de los regímenes que esos tratados establecen.

Según se ha indicado, los organismos extranjeros pueden acceder a algunos sitios en la Internet y otros sistemas de comunicación existentes en el Canadá y los funcionarios canadienses pueden acceder, y de hecho lo hacen, a sitios similares creados por otros países, sin perjuicio de las necesarias medidas de seguridad. Una de las principales preocupaciones del Canadá es la seguridad de su frontera con los Estados Unidos de América y los desplazamientos entre los dos países y, en ese contexto, se han creado numerosos mecanismos bilaterales para facilitar el intercambio de información. También se han puesto en marcha iniciativas de intercambio de información con otros países y organizaciones intergubernamentales regionales y de otro tipo, como la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), que se utilizan cuando resulta apropiado y conveniente.

Procedimientos legales y mecanismos administrativos canadienses por los que se rige el intercambio de información pública y no pública

Como se ha observado anteriormente, el acceso a la información que obra en poder del Gobierno del Canadá sólo se limita si se trata de datos personales amparados por la Ley de protección de la intimidad, información confidencial protegida por la Ley de seguridad de la información o información personal sobre la que existan expectativas razonables de privacidad con arreglo a la Carta canadiense de derechos y libertades. Por regla general y sin perjuicio de lo que establezcan disposiciones legales específicas sobre la prohibición de revelar información confidencial, la demás información se considerará de carácter público y no existirán límites para su revelación o difusión.

1.13 El Comité contra el Terrorismo observa que, de acuerdo con el párrafo 3.74 del Proyecto de ley C-36, los tribunales del Canadá no tendrían competencia sobre un extranjero acusado de haber cometido un acto de terrorismo en

el extranjero cuando se encontraba presente en el Canadá (sin ser residente en el país). Sírvanse indicar el procedimiento que seguiría el Canadá en el caso de un extranjero presente en el país que presumiblemente hubiera cometido un acto terrorista en el extranjero, a la luz del principio de “enjuiciar o extraditar” (*aut dedere aut judicare*) del derecho internacional.

El Canadá ha establecido la jurisdicción necesaria respecto de los delitos a los cuales debe aplicarse el principio *aut dedere aut judicare* conforme a las obligaciones que tiene asumidas en virtud de instrumentos jurídicos internacionales, incluidas las convenciones y protocolos pertinentes contra el terrorismo. El Canadá estima que, en general, la jurisdicción ampliada o universal debe aplicarse únicamente de conformidad con el derecho internacional consagrado en los tratados pertinentes, y la legislación, por lo tanto, únicamente presupone jurisdicción en la medida requerida para cada delito conforme a cada instrumento internacional.

Por regla general, las disposiciones relativas a cada delito se añaden a los capítulos pertinentes del Código Penal, según el tipo de conducta tipificado conforme al tratado que corresponda. La jurisdicción para enjuiciar a personas acusadas de estos delitos que el Canadá debe enjuiciar o extraditar y respecto de los cuales declina la extradición está legislada respecto de cada uno de esos delitos en el párrafo pertinente del artículo 7 del Código Penal. Cada párrafo estatuye la jurisdicción requerida por el instrumento jurídico internacional de que se trate. Cuando se trata de delitos de terrorismo, dichos delitos se enumeran en el apartado a) de la definición de “actividad terrorista” del párrafo 1) del artículo 83.01 del Código Penal. Estos delitos están excluidos de la disposición general sobre jurisdicción estatuida en el párrafo 3.74 del artículo 7 del Código Penal, que se aplica sólo a los delitos que no están tipificados en un instrumento jurídico internacional y a los cuales no se les aplican las obligaciones de *aut dedere aut judicare*. Ello se debe a que las normas de jurisdicción pertinentes figuran, en cambio, en el párrafo (3.73) del artículo 7.

Cuando se trata de un delito tipificado en virtud del Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, por ejemplo, el delito mismo está tipificado en el artículo 83.02 del Código Penal. Figura como una modalidad de “actividad terrorista” en el párrafo 1) a) x) del artículo 83.01, que lo excluye del ámbito del párrafo 3.74 del artículo 7. La disposición jurisdiccional pertinente, el párrafo (3.73) del artículo 7, declara la jurisdicción en una serie de circunstancias enumeradas, incluida, conforme al apartado d), la circunstancia de que “... quien comete el acto o incurre en omisión esté, después de su comisión, presente en el Canadá”. Disposiciones similares dan efecto a los requisitos jurisdiccionales establecidos por otras convenciones y protocolos contra el terrorismo.

1.14 Sírvanse indicar si el Canadá ha adoptado medidas para establecer la responsabilidad civil, penal o administrativa de las personas jurídicas por ilícitos penales, en particular los relacionados con actividades terroristas. Sírvanse mencionar la documentación legal pertinente y presentar una reseña de ésta. ¿Es posible imputar responsabilidad a una persona jurídica cuando no se ha identificado o condenado a una persona física? ¿Podría, a este respecto, el Canadá informar al Comité contra el Terrorismo del número de causas en las cuales se impusieron sanciones por la prestación de apoyo a terroristas u organizaciones terroristas a: organizaciones sin fines de lucro, instituciones financieras y extrafinancieras y otros intermediarios financieros?

El Canadá no ha enjuiciado a entidades sin fines de lucro por prestar apoyo a terroristas u organizaciones terroristas.

Según el artículo 2 del Código Penal del Canadá, los términos “el que” (*every one*), “persona”, “propietario” y expresiones similares abarcan a una serie de personas jurídicas. Ello significa que las personas jurídicas están sujetas a plena responsabilidad por todos los ilícitos penales en los cuales se empleen estos términos básicos. La consecuencia es que en el Canadá las personas jurídicas pueden ser sujetos activos de cualquier delito salvo que la disposición que tipifique el delito disponga otra cosa. Están plenamente sujetas a responsabilidad por todos los delitos orientados específicamente hacia actividades terroristas y también por todos los delitos de derecho común, como los delitos de homicidio, que puedan perpetrarse en el contexto de actividades terroristas. De ser condenadas, las personas morales son penadas con multa.

En 2003, se enmendaron las disposiciones pertinentes del Código Penal a fin de establecer una norma más clara y amplia sobre el ámbito de la responsabilidad penal y los tipos de organización a los cuales se aplica. Las enmiendas añaden en particular diversos tipos nuevos de organización, con prescindencia de que sean entidades con o sin fines de lucro. Las enmiendas están contenidas en el Proyecto de Ley C-45 (ahora S.C2003, c.21), titulado Ley de enmienda del Código Penal (responsabilidad penal de las organizaciones).

Las normas enmendadas del Código Penal dicen como sigue.

El texto enmendado del artículo 2 (definiciones) reza (en parte) como sigue:

En la presente Ley:

“el que”, “persona” y “propietario” y expresiones similares, abarcan a Su Majestad y a una organización.

Por “organización” se entiende:

- a) Un organismo público, corporación, sociedad, compañía, firma, sociedad colectiva, sindicato o municipio o
- b) Una asociación de personas que:
 - i) Se constituya con un fin común;
 - ii) Tenga estructura operacional; y
 - iii) Se presente ante el público como una asociación de personas.

Los nuevos artículos 22.1 y 22.2 se sancionaron con el objeto de establecer con detalle las normas para imputar responsabilidad penal a las personas jurídicas por delitos de negligencia criminal y delitos que requieren intención subjetiva respectivamente:

22.1 Cuando se trate de un delito en el que el ministerio público deba probar negligencia, se estimará que una organización es parte en el delito si:

- a) Actúa dentro del ámbito de sus facultades;
- i) Uno de sus representantes es parte en el delito o
- ii) La conducta de dos o más de sus representantes, por acción o por omisión, es de índole tal que, si se hubiera tratado de la conducta de un

solo representante, se habría estimado que dicho representante era parte en el delito; y

b) El funcionario superior que sea responsable por el aspecto de las actividades de la organización que esté relacionado con el delito se aparta —o los funcionarios principales colectivamente se apartan— de manera señalada de la norma de diligencia que, en esas circunstancias, habría cabido esperar que impidiera que un representante de la organización fuera parte en el delito.

22.2 Cuando se trate de un delito en el que el ministerio público deba probar falta —distinta de la negligencia—, se estimará que una organización es parte en el delito cuando, con intención al menos en parte de beneficiar a la organización, uno de sus funcionarios superiores:

a) Actuando dentro del ámbito de sus facultades, sea parte en el delito;

b) Con el estado de ánimo requerido para ser parte en el delito y actuando en el marco de sus facultades, dirija los actos de otros representantes de la organización a fin de que éstos, por acción u omisión, cometan el acto tipificado en el delito; o

c) A sabiendas de que un representante de la organización es o va a ser parte en el delito, no adopte todas las medidas que sean razonables para impedirlo.

La nueva legislación eleva también la cuantía de la multa aplicable a una organización condenada por delito en juicio sumario. Las multas por delitos de derecho penal no tienen una cuantía máxima. También se dispone sobre el régimen de libertad condicional en el caso de una organización.

Que una persona jurídica o quienes actúan en su nombre sean declarados responsables es una cuestión de hecho que se ha de determinar en cada causa. No hay óbice a que una persona jurídica y una persona física sean condenadas por el mismo delito, y ambas partes o todas las partes pueden ser condenadas cuando el juez de los hechos determine que cada uno de los acusados está incurso en todos los elementos esenciales del delito de que se trate. Una persona jurídica puede también ser condenada en una causa en la que no se enjuicie a ninguna persona natural o en la que se procese, pero no se condene, a una persona natural por el mismo delito. Las fuentes respecto de estas cuestiones son esencialmente el derecho jurisprudencial, basado en el *common law* inglés, y los artículos 2, 21, 22.1 y 22.2 del Código Penal, en su forma enmendada. El precedente jurisprudencial en materia de responsabilidad de las personas jurídicas es en general la decisión en los autos titulados *R. contra Canadian Dredge and Dock Co* [1986] 1 S.C.R.662 (Tribunal Supremo del Canadá). El precedente jurisprudencial en materia de responsabilidad de las personas naturales y jurídicas en el mismo caso es la decisión en los autos titulados *R. contra Fell* (1981), 64 C.C.C (2nd) 456, 131 D.L.R (3rd) 105 (Tribunal de Apelaciones de Ontario).

Las personas jurídicas en el Canadá están sujetas a responsabilidad por muchos delitos administrativos y reglamentarios, incluidos ilícitos relacionados con la banca, la actividad financiera y la administración de empresas, que son ajenos al ámbito del derecho penal. En general, estos ilícitos se castigan con sanciones menores y requieren un grado menor de *mens rea* que los delitos de derecho penal, por ejemplo, las disposiciones a tenor de las cuales las entidades reguladas no deben actuar con negligencia o las disposiciones que prescriben que se actúe con la debida diligencia en el cumplimiento de las obligaciones impuestas por ley.

En el ámbito de la responsabilidad civil, cabe señalar que no existe una responsabilidad civil por ilícitos civiles en relación con los delitos de derecho penal vinculados específicamente con el terrorismo. Con todo, se pueden entablar acciones civiles por ilícitos civiles en relación con actividades de terrorismo. Por ejemplo, el cohecho puede ser indicativo del delito civil de asociación ilícita¹. Otros ilícitos pueden también ser causa de una acción civil en casos de terrorismo, como el delito civil de injerencia ilícita en un derecho económico o el delito civil de fraude.

1.15 ¿Podría el Canadá suministrar información al Comité contra el Terrorismo respecto del número de personas enjuiciadas por actividades terroristas, la financiación de actividades terroristas, el reclutamiento para organizaciones terroristas y la prestación o solicitud de apoyo para terroristas u organizaciones terroristas?

El sistema de estadísticas de la justicia penal en el Canadá se basa en una clasificación de acuerdo con los delitos tipificados por el derecho canadiense y, hasta la tipificación de los delitos contenidos en la Ley de lucha contra el terrorismo en diciembre de 2001, ningún delito penal en el Canadá constaba de un elemento de terrorismo *per se*. Las categorías relacionadas con el terrorismo se incorporaron automáticamente después de la sanción de la Ley, pero al 31 de diciembre de 2003 el Centro Canadiense de Estadísticas Judiciales no había registrado ninguna querella ni las autoridades tenían noticia de ninguna querella en curso. Para dar una respuesta definitiva sobre el asunto sería necesario celebrar más consultas con los Ministros de Justicia provinciales, que tienen competencia concurrente con el Ministro de Justicia federal respecto de estos delitos; sin embargo, cabe presumir que no se ha instaurado ni se instaurará ninguna acción de esta índole en la jurisdicción provincial sin consultar a las autoridades federales.

Antes de sancionarse la ley que tipificó los delitos de 2001, si se hubieran incoado procesos por terrorismo en el Canadá, esos procesos se habrían incoado por los delitos sustantivos pertinentes, como los de homicidio o secuestro. Un proceso importante por homicidio derivado de la destrucción de una aeronave de Air-India en vuelo del Canadá a la India por vía del Reino Unido que produjo la muerte de 329 personas, en junio de 1985, se instauró en 2003 y todavía estaba pendiente ante la justicia al 31 de diciembre de 2003. Las autoridades tienen noticia de un número muy reducido de otros incidentes desde 1980 en los cuales se cometieron delitos por motivos políticos o de terrorismo. En el período 1991-1996 el Centro Canadiense de Estadísticas Judiciales incluyó, en sus protocolos de encuesta relativos a incidentes de homicidio, la categoría de “delitos relacionados con el terrorismo”; sin embargo, no se registraron incidentes y la clasificación fue abandonada por considerarse que carecía de significación estadística. Desde entonces se ha solicitado información sobre “terrorismo, causa política”, como modalidad de motivación, y sólo se registró un incidente entre 1997 y 2002, el año más reciente del que se dispone de estadísticas (aunque no todas las provincias canadienses respondieron a la pregunta, se estima que los datos representan alrededor del 80% del total).

¹ En el Canadá, el acto de asociación ilícita es accionable como ilícito civil cuando dos o más personas 1) se ponen de acuerdo para realizar un acto ilícito con el propósito fundamental de causar un daño al demandante, 2) se ponen de acuerdo lícitamente con el propósito fundamental de causar daño al demandante, o 3) se ponen de acuerdo para actuar ilícitamente y su conducta está dirigida contra el demandado y los demandados saben o deben saber que hay probabilidad de causarle daño.

1.16 ¿Podría el Canadá presentar al Comité contra el Terrorismo un resumen del procedimiento utilizado para incluir en lista a una organización en calidad de organización terrorista? ¿Podría el Canadá informar del número de organizaciones terroristas que ha incorporado a esa lista, en particular de organizaciones terroristas extranjeras distintas de las que figuran en la lista del Consejo de Seguridad? ¿Cuánto se tarda para incluir en lista a una organización terrorista a petición de otro Estado o con el fundamento de la información de otro Estado? ¿Cuántas personas (morales o físicas) han sido enjuiciadas por solicitar apoyo para organizaciones prohibidas y otros grupos u organizaciones terroristas (incluido el reclutamiento)?

Las Normas para la represión del terrorismo con arreglo a las disposiciones de las Naciones Unidas autorizan a la autoridad ejecutiva del Canadá —el Gobernador en Consejo— a preparar una lista de entidades de las que existen causas razonables para sospechar que una persona (física o moral) ha realizado o intenta realizar una actividad terrorista, ha participado en ella o facilitado su comisión, está controlada directa o indirectamente por esa persona o actúa en su nombre o bajo su dirección o en asociación con ella. La información que se examina durante el procedimiento del Gobernador en Consejo está protegida por el régimen de confidencialidad.

En el proceso administrativo de preparar una nómina de personas para postular su inclusión en la lista mediante el proceso del Gobernador en Consejo, los servicios de inteligencia deben preparar un informe a fin de cumplir el criterio para la inclusión en lista contemplado en las Normas y se debe celebrar una consulta antes del examen por el proceso del Gobernador en Consejo. En el marco de la cooperación internacional de lucha contra el terrorismo, el proceso puede ser iniciado cuando otro Estado presenta una petición formal al Canadá de que adopte medidas para congelar los bienes de una entidad determinada. En ese caso, el organismo de inteligencia pertinente, que también realiza su propia investigación, examina y evalúa la información suministrada al Canadá por otro Estado como fundamento para la inclusión en la lista. El Canadá, por su parte, comunica al Estado requirente si la información que ha suministrado es insuficiente para cumplir los recaudos de la inclusión en lista conforme a las Normas. El Canadá trata de efectuar la inclusión en lista sin tardanza cuando recibe una petición de otro Estado, si se cumplen los recaudos para la inclusión en lista, a fin de bloquear la transferencia de bienes al Canadá procedente de otros Estados que han tomado medidas contra la entidad. El plazo de inclusión en lista puede variar según la urgencia del asunto y la información que se haya suministrado al Canadá en sustento de la petición. Dentro de lo posible, se trata de efectuar la inclusión en lista en forma concertada con nuestros interlocutores internacionales.

Las Normas para la represión del terrorismo con arreglo a las disposiciones de las Naciones Unidas también incorporan por remisión a las organizaciones terroristas extranjeras incluidas en lista por el Consejo de Seguridad. Actualmente 56 personas (físicas y morales) están incluidas en la lista que no han sido incluidas en lista por el Comité de Sanciones contra Al-Qaida y los Talibanes. De esas personas, 19 figuran también en lista por infracción de disposiciones del Código Penal.

El artículo 83.05 del Código Penal autoriza al Gobernador en Consejo a expedir una lista de entidades de las que existan razones fundadas para estimar que han participado intencionalmente en una actividad terrorista, o la han facilitado, conforme a la tipificación consignada en el Código Penal.

La información que se examina en el proceso del Gobernador en Consejo está protegida por el régimen de confidencialidad. Sin embargo, en el proceso administrativo de preparar una relación de entidades para postular su inclusión en la lista mediante el proceso del Gobernador en Consejo, se debe preparar un informe detallado de inteligencia o un informe criminal, a fin de cumplir el criterio para la inclusión en lista contemplado en el Código Penal, y se debe celebrar una consulta con diversos interesados antes del examen por el proceso del Gobernador en Consejo.

El proceso para la inclusión en lista de entidades conforme al Código Penal, que consta de diversos frenos y contrapesos, se basa en la necesidad de que se cumpla el recaudo de que haya un fundamento razonable para estimar que la entidad realiza o ha realizado actividades terroristas y que lo ha hecho **a sabiendas**.

Actualmente figuran en lista 34 entidades por actos reprimidos por el Código Penal (véase la respuesta 1.9). Veintiuna de esas entidades no han sido incluidas en lista por el Comité de Sanciones contra Al-Qaida y los Talibanes, a saber:

Organización Abu Nidal, Aum Shinrikyo, País Vasco y Libertad, Gamma'a al-Islamiyya, Hamas, Hezbolá, Partido Obrero del Kurdistan (PKK), Ejército de Liberación Nacional (ELN), Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Sendero Luminoso (SL), Jihad Islámica Palestina (PIJ), Frente de Liberación Palestino (PLF), Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), FPLP-Comando General (FPLP-CG), Lashkar E-Tayyiba, Brigada de Mártires Al-Aqsa, Vanguardias de Conquista, Babbar Khalsa Internacional, Babbar Khalsa, Federación Internacional de la Juventud Sikh.

La lista completa de quienes figuran en lista por infracciones del Código Penal se puede consultar en:

http://www.psepc.gc.ca/national_security/counter-terrorism/AntiTerrorism_e.asp

El proceso para la inclusión en lista de entidades por infracción de disposiciones del Código Penal está establecido por ley y motivado por las amenazas a la seguridad del Canadá. Como se dijo antes, el proceso, que consta de diversos frenos y contrapesos, se sustenta en la necesidad de que haya fundamento razonable para estimar que la entidad realiza o ha realizado actividades terroristas, **a sabiendas**.

El plazo para la inclusión en lista de una entidad, que varía según el caso, depende de factores tales como la cantidad y la calidad de la información disponible, la posibilidad de cumplir el criterio legislativo para la inclusión en lista y la decisión del Gobernador en Consejo.

Hasta la fecha no se han incoado querellas contra personas o entidades por solicitar apoyo para organizaciones prohibidas y/u otros grupos u organizaciones terroristas, conforme a las disposiciones del Código Penal.

1.17 Sírvanse esbozar los procedimientos legales y administrativos establecidos por el Canadá para proteger obras portuarias, buques, personas, cargas, unidades de transporte de carga, instalaciones frente a la costa y provisiones de a bordo contra los riesgos de ataques terroristas ¿Han instituido las autoridades canadienses competentes procedimientos apropiados para poder examinar y actualizar los planes de seguridad del transporte en el Canadá en tiempo y forma apropiados?

El 22 de enero de 2003, el Ministro de Transporte, en nombre del Gobierno del Canadá, anunció un paquete quinquenal de iniciativas por un valor máximo de 172,5 millones de dólares de los Estados Unidos, destinado a realzar la seguridad del sistema de transporte marino y las fronteras marítimas del país. Los proyectos de seguridad marina hacen hincapié en salvaguardar y proteger nuestra infraestructura marina, la vigilancia de las aguas territoriales y el perfeccionamiento de nuestras capacidades de intervención en casos de emergencia. Entre los proyectos específicos cabe mencionar los siguientes: el aumento de la vigilancia y el seguimiento del tráfico marino, incluidos la identificación y el seguimiento en “tiempo cuasi real” de buques en aguas canadienses; el control de pasajeros y tripulación a bordo de buques; la instalación de nuevo equipo de detección en puertos para detectar radiaciones en contenedores; la nueva financiación para mejorar los equipos de intervención de emergencia de la Real Policía Montada del Canadá y la creación de cargos permanentes de investigadores en los grandes puertos; la introducción de nuevas mejoras en la seguridad portuaria mediante el establecimiento de zonas restringidas y la aplicación de un régimen de control de antecedentes a las personas que prestan servicio dentro de esas zonas restringidas; los ejercicios de capacitación en medidas antiterroristas; visados para la gente de mar que aborda buques en el Canadá; y la formulación y aplicación de nuevas medidas de seguridad en consonancia con las recomendaciones recientes de la Organización Marítima Internacional (OMI).

<http://www.tc.gc.ca/mediaroom/releases/nat/2003/03-gc001.htm>

A fin de dar efecto al Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (Código ISPS) de la OMI, a tenor del cual los buques de clase SOLAS en travesías internacionales y los puertos que les presten servicios deben realizar estudios de seguridad y elaborar planes de seguridad, el Canadá ha formulado el reglamento respectivo. El proyecto de reglamento, que se tiene previsto promulgar en la primavera de 2004, se puede consultar en:

http://www.tc.gc.ca/vigilance/sep/marine_security/regulatory/menu.htm

De conformidad con el Código ISPS, las administraciones de puertos, en consulta con el Ministerio de Transporte del Canadá, determinan cuándo es necesario actualizar los planes de seguridad, que se deben presentar nuevamente al Ministerio para su aprobación. El Organismo Estatal de Control de Puertos vela por la aplicación y observancia de las normas internacionales en materia de medio ambiente y seguridad.

1.18 ¿Ha dado efecto el Canadá a las normas y recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) (anexo 17)? ¿Podría el Canadá informar al Comité contra el Terrorismo cuándo se concluyó la auditoría de seguridad de la OACI de los aeropuertos internacionales del país?

El Canadá se ha comprometido a dar efecto a las normas y recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

El Canadá aplica las obligaciones que tiene asumidas en virtud del anexo 17 mediante un programa nacional amplio e integrado de legislación, reglamentos, fiscalización regulatoria y represión, inteligencia, capacitación, sensibilización y otros elementos. Las facultades de elaboración, actualización y aplicación del programa canadiense de seguridad de la aviación corresponden al Ministerio de Transporte en virtud de la Ley de aeronáutica, que atribuye al Ministro la responsabilidad por el desarrollo y la regulación de la aeronáutica y la supervisión de todas las cuestiones

relacionadas con la aeronáutica, incluía la seguridad de la aviación. La administración concreta del programa corre de cuenta del Ministerio de Transporte del Canadá. El Organismo Canadiense de Seguridad del Transporte Aéreo (CATSA) es una corporación de la Corona, con sede en la Región de la Capital Nacional, creada el 1º de abril de 2002 en virtud del Proyecto de ley C-49. El CATSA, que rinde cuentas al Parlamento por conducto del Ministro del Transporte, es responsable por las operaciones de control de seguridad en los aeropuertos canadienses.

Para más información sobre el programa canadiense de seguridad de la aviación, incluida la legislación y reglamentación aplicables, se pueden consultar los sitios Web siguientes:

<http://tcinfo/vigilance/en/securityemergencypreparedness/nationaltransport/policy/aviation.htm>

<http://www.catsa-acsta.gc.ca/english/index.htm>

El Canadá todavía no ha sido objeto de una auditoría en el marco del Programa Universal de Auditoría de la Vigilancia de la Seguridad Operacional (USAP) y no se prevé que se haya de realizar una auditoría en 2004.

1.19 El Comité contra el Terrorismo acogería con beneplácito que el Canadá le presentara un esbozo de las providencias que ha adoptado o tiene previsto adoptar en relación con lo siguiente:

La ratificación y aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención

El Canadá, que estima que el proceso de ratificación es de suma importancia, procede con diligencia con la mira de asegurar una observancia cabal y apropiada. Antes de proceder a ratificar un instrumento jurídico internacional, el Gobierno del Canadá debe velar por que exista un régimen interior que permita dar efecto a los compromisos que ha de asumir el país en virtud del tratado.

El Canadá ya ha ratificado la Convención y dos Protocolos más. El proceso que culminará en la ratificación del Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, requiere la elaboración y sanción de nuevas disposiciones legales y reglamentarias. Ambos aspectos imponen un proceso prolongado y complejo (véanse los detalles *infra*).

Las enmiendas legislativas necesarias se sancionaron en mayo de 2003. Aunque ha concluido el proceso legislativo, todavía se están elaborando las disposiciones reglamentarias imprescindibles para que el Canadá esté en entera conformidad con el Protocolo.

El proceso reglamentario está muy avanzado. Tras las deliberaciones de las Comisiones competentes de la Cámara de los Comunes y el Senado, el poder ejecutivo examinará las recomendaciones parlamentarias, así como las observaciones recibidas del público, con miras a ultimar la reglamentación.

Una vez sancionadas las disposiciones reglamentarias y antes de que el Canadá pueda dar curso al instrumento de ratificación pertinente, se requiere una decisión oficial del Gabinete federal. Entre tanto, el Canadá tiene establecidas leyes y disposiciones administrativas estrictas para fiscalizar la importación y exportación de armas de fuego, piezas, componentes y municiones y para controlar la posesión y cesión de esos artículos mientras se encuentran en el país.

Aplicación de las recomendaciones de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) respecto del Protocolo antes mencionado

El Organismo de Control de Fronteras del Canadá (CBSA), en su calidad de miembro de la OMA, hace suya la Recomendación del Consejo de Cooperación Aduanera sobre la incorporación en las nomenclaturas estadísticas nacionales de subpartidas para facilitar el seguimiento y control de los productos identificados en el Protocolo relativo a las armas de fuego que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Recomendación del Consejo de Cooperación Aduanera relativa al Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones.

Las enmiendas legislativas sancionadas con el fin de que el Canadá pudiera ratificar el Protocolo de las Naciones Unidas recibieron el Asenso Real en mayo de 2003. El CBSA está a la espera de que se ultimen los reglamentos conexos y de que éstos entren en vigor para dar cabal efecto al Protocolo de las Naciones Unidas y a las recomendaciones de la OMA.

El uso de informes electrónicos y la promoción de la seguridad en la cadena de suministros conforme a lo dispuesto en el Anexo General del Convenio de Kyoto revisado de la OMA, así como de las normas de la OMA

El Canadá, que apoya el Convenio de Kyoto revisado de la OMA, fue uno de sus primeros signatarios. Aún no se le ha dado efecto. El Canadá participó en el Grupo de Trabajo de la Organización Mundial de Aduanas sobre seguridad y facilitación de la cadena de suministros del comercio internacional.

El Canadá fue uno de los países que impulsaron la aprobación de la resolución de la OMA sobre seguridad y facilitación de la cadena de suministros del comercio internacional, que incluía los siguientes elementos:

- Un examen completo del Modelo de datos de la OMA, para el verano de 2003;
- Directrices para ayudar a los miembros a elaborar el fundamento jurídico y los procesos necesarios a fin de implementar la transmisión electrónica avanzada de datos aduaneros;
- Mecanismos de cooperación entre los miembros y el sector industrial sobre la seguridad y facilitación de la cadena de suministros del comercio internacional.

El Canadá, el primer país que dio efecto al Modelo de datos de la OMA, es miembro activo del Subcomité de Gestión de la Información de la OMA y del Grupo de Trabajo sobre el Modelo de datos de la OMA.

Aplicación del Programa de Acción (aprobado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos)

El presente resumen se referirá a la aplicación por el Canadá del Programa de Acción de las Naciones Unidas para prevenir, combatir y erradicar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos ("Programa de Acción de las Naciones Unidas"). El informe completo se presentó al Departamento de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas en la reunión bienal de Estados para examinar la aplicación del Programa de Acción de las Naciones Unidas sobre armas ligeras, celebrada en julio de 2003 (el texto figura en el documento de las Naciones Unidas A/CONF.192/BMS/2003/CRP.48).

En el plano nacional

El Comité Canadiense sobre Armas Pequeñas y Ligeras es el organismo canadiense de coordinación que asesora al Gobierno sobre la aplicación del Programa de Acción de las Naciones Unidas, facilita la coordinación de esta aplicación y vela por el intercambio de información sobre las actividades relacionadas con las armas pequeñas y ligeras.

Las cuestiones vinculadas con la posesión, los controles de exportación, la intermediación, la marcación, rastreo y registro, la disposición y los aspectos ilícitos de las armas pequeñas y ligeras se rigen por un cuerpo de normas legislativas, reglamentos y procedimientos administrativos. Entre esas normas figuran la Ley de armas de fuego, la Ley de permisos de importación y exportación, la Ley de producción para la defensa, el programa de bienes controlados, la Ley de las Naciones Unidas, el Acuerdo de Wassenaar y el Código Penal. Distintos organismos se ocupan de diversos aspectos de las armas pequeñas y ligeras, incluidos entre ellos la Real Policía Montada del Canadá, el Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional, el Departamento de la Defensa Nacional, los Servicios Canadienses de Inteligencia Criminal, los Servicios Nacionales de Policía y el Centro Canadiense de Armas de Fuego.

El Canadá ha suscrito el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención Interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados de la Organización de los Estados Americanos. Las enmiendas a la Ley de armas de fuego, presentadas en el Parlamento en marzo de 2001 y aprobadas en mayo de 2003, allanarán el camino para elaborar reglamentos que garanticen que el Canadá observe las disposiciones sobre armas de fuego contenidas en ambos documentos en la sanción de nuevas leyes; este régimen reglamentario, que se prevé entrará en vigor en 2004, trasladaría enteramente la responsabilidad por la importación de armas de fuego al Centro Canadiense de Armas de Fuego. Aunque la legislación que autorizará al Canadá a exigir una marcación más completa de las nuevas armas de fuego importadas o de fabricación nacional ha recibido el Asenso Real, todavía se están examinando los reglamentos pertinentes con arreglo a las recomendaciones recibidas en las consultas con las Comisiones parlamentarias. Por último, en consonancia con sus compromisos multilaterales, el Canadá adoptará en breve una reglamentación que autorizará el

tránsito por el Canadá de armas de fuego restringidas y no restringidas por cuenta de empresas.

En el plano regional

Desde 2001, el Canadá ha apoyado y continúa apoyando diversos talleres y seminarios en Asia central y sudoriental, América Latina, África y Europa oriental sobre la aplicación del Programa de Acción de las Naciones Unidas. Además, ha brindado sus conocimientos especializados en diversos planos a la comunidad internacional y ha participado en diversas actividades, entre otras, los programas de desarme, capacitación, investigación y reintegración, en Moldova, Albania, Serbia y Montenegro, América Latina y el Cuerno de África y la Región de los Grandes Lagos.

El Canadá es un activo participante en el Acuerdo de Wassenaar. Los representantes de la sociedad civil en el Canadá se ocupan también de la cuestión en el contexto de consultas anuales entre el Gobierno y las ONG sobre la consolidación de la paz y seguridad humana y por conducto del nuevo Comité Canadiense sobre Armas Pequeñas y Ligeras.

En el plano mundial

El Canadá por lo común da efecto a las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por conducto de los reglamentos que expide en virtud de la Ley de las Naciones Unidas. Una vez adoptada la reglamentación pertinente, las autoridades canadienses, como el Organismo de Rentas y Aduanas del Canadá, deben inspeccionar y detener las mercancías que estén en contravención del régimen de sanciones. La Real Policía Montada del Canadá está facultada para efectuar investigaciones y hacer las denuncias correspondientes.

El Canadá observa el régimen de presentación de informes del Acuerdo de Wassenaar, conforme al cual los Estados participantes intercambian información sobre las entregas de armas convencionales a Estados no participantes. El Canadá presenta informes anuales al Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas y a la OSCE. Además, el sistema de marcación de las Fuerzas Armadas del Canadá se ha puesto en conocimiento de la OSCE. Los Servicios Nacionales de Policía, la Real Policía Montada Canadiense, están elaborando una estrategia nacional sobre contrabando de armas de fuego para mejorar el intercambio de datos de inteligencia y apoyo operacional, y el Departamento de la Defensa Nacional realiza una amplia gama de actividades de capacitación en las esferas generales de la seguridad física de edificios, el control general de existencias, la gestión de registros, etc.